

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

2022 ABR -1 PM 2: 21

OFICINA DE
CERTIFICACIÓN JUDICIAL
Y GOBERNACIÓN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

ACTOR: MOVIMIENTO CIUDADANO

AUTORIDADES RESPONSABLES:

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

NUEVO LEÓN

EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE NUEVO LEÓN

HONORABLES MINISTROS Y MINISTRAS DE LA

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA /

DE LA NACIÓN.

PRESENTE.

DANTE ALFONSO DELGADO RANNAURO, BENJAMÍN ALAMILLO GONZÁLEZ, ANA LUCIA BADUY VALLES, RUBEN ISAAC BARRIOS OCHOA, JACOBO DAVID CHEJA ALFARO, PRISCILLA FRANCO BARBA, MARTHA PATRICIA HERRERA GONZÁLEZ, TABITA ORTÍZ HERNÁNDEZ, LUCÍA ALEJANDRA PUENTE GARCÍA y JUAN IGNACIO ZAVALA GUTIÉRREZ, Coordinador, Integrantes y Secretario General de Acuerdos, respectivamente, de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, cuya personalidad se acredita con las certificaciones expedidas por el Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, Licenciada DANIELA CASAR GARCÍA, de fechas veintinueve de abril de dos mil diecinueve, y dos de abril de dos mil diecinueve, respectivamente, que se acompañan para los efectos legales consiguientes; por este recurso y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 20 numeral 2, inciso o) de los

Estatutos de Movimiento Ciudadano; comparecernos para presentar en tiempo y forma la presente ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

Con fundamento en los artículos: 104, fracción VI y 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 9, 29, 39, 22, 59, 61 y 62 tercer párrafo, de la citada Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 9 fracción 1 y 10 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en contra de la expedición, promulgación y publicación de la reforma a los artículos 144 bis 3 y 146 bis 2 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, por considerar que resulta contraria a la Norma Suprema y por consiguiente inválida.

De conformidad con el artículo 5º de la invocada Ley Reglamentaria y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de la misma ley, señalamos como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el inmueble marcado con el [REDACTED]

[REDACTED] así mismo, designamos como Delegados para que indistintamente formulen promociones, concurren a las audiencias y en ellas rindan pruebas, presenten alegatos y promuevan incidentes, a los CC. [REDACTED]

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 10 fracciones III y IV, 22, y 61, de la Ley Reglamentaria en comento, además de lo ya expresado, manifestamos lo siguiente:

I. NOMBRE DEL ACTOR: MOVIMIENTO CIUDADANO, representado por los CC. DANTE ALFONSO DELGADO RANNAURO, BENJAMÍN ALAMILLO GONZÁLEZ, ANA LUCIA BADUY VALLES, RUBEN ISAAC BARRIOS OCHOA, JACOBO DAVID CHEJA ALFARO, PRISCILLA FRANCO BARBA, MARTHA PATRICIA HERRERA GONZÁLEZ, TABITA ORTÍZ HERNÁNDEZ, LUCÍA ALEJANDRA PUENTE GARCÍA y JUAN IGNACIO ZAVALA GUTIÉRREZ, con el carácter de Coordinador, Integrantes y

Secretario General de Acuerdos, respectivamente, de la COMISIÓN OPERATIVA NACIONAL.

II. ÓRGANOS LEGISLATIVOS Y EJECUTIVO QUE INTERVINIERON EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES IMPUGNADAS:

a) **ÓRGANO LEGISLATIVO Y AUTORIDAD EMISORA:** El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

b) **ÓRGANO EJECUTIVO Y AUTORIDADES PROMULGADORAS:** El C. Gobernador del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

III. NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA Y EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERE PUBLICADO: Las reformas a los artículos 144 bis 3 y 146 bis 2 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, publicadas en fecha 4 de marzo de 2022.

IV. PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS: Artículos 1º, 14, 16, 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior se sustenta en los antecedentes y conceptos de invalidez, siguientes:

ANTECEDENTES

1. Reforma constitucional en materia de paridad de género. El 6 de junio de 2019 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad entre Géneros. En el artículo cuarto transitorio se vinculó a las legislaturas de las entidades federativas a realizar, en el ámbito de su competencia, las reformas correspondientes.

2. Iniciativas presentadas en el Congreso de Nuevo León. Como consecuencia de dicha reforma, se presentaron diversas iniciativas de reformas a la Constitución local, a fin de asegurar la observancia de este principio: a) Expediente Legislativo 12702/LXXV, b)

Expediente Legislativo 12725/LXXV, c) Expediente Legislativo 12860/LXXV, d) Expediente Legislativo 13190/LXXV, e) Expediente Legislativo 13418/LXXV.

3. Reforma legislativa en materia de violencia política de género. En fecha 13 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

4. Iniciativas presentadas en el Congreso de Nuevo León. Como consecuencia de dicha reforma, se presentaron diversas iniciativas de reforma a la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, mismas que se listan a continuación: a) Expediente 11950/LXXV, b) Expediente 13476/LXXV, c) Expediente 13479/LXXV, d) Expediente 13544/LXXV, e) Expediente 13548/LXXV.

5. Prohibición constitucional. El artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una prohibición para legislar en materia electoral de 90 días antes del proceso electoral en que vayan a aplicarse.

6. Inicio del periodo ordinario de actividad electoral del OPLE. En Nuevo León, el artículo 92, primer párrafo, de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León establece que la Comisión Estatal Electoral debe abrir su periodo ordinario de actividad electoral durante los primeros siete días de octubre del año anterior al de la jornada electoral. En el Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral CEE/CG/04/2020 de fecha 27 de enero de 2020, se estableció el 7 de octubre de 2020 como la fecha en que se celebra la sesión de la Comisión Estatal Electoral para el proceso electoral 2020-2021.

7. Fecha límite para reformar. La fecha límite para reformar la Ley Electoral del Estado a fin de que se aplique en la siguiente contienda electoral era el 9 de julio de 2020 y el Congreso del Estado de Nuevo León no realizó la reforma electoral correspondiente.

8. Juicio Electoral por omisión legislativa en materia de paridad de género. El 24 de junio de 2020, Movimiento Ciudadano promovió Juicio Electoral en contra de la omisión legislativa del Congreso del Estado de Nuevo León de llevar a cabo los ajustes necesarios para implementar en el orden local las reformas constitucionales en materia de paridad de género y de violencia política de género.

9. Reencauzamiento y resolución del Tribunal Estatal Electoral. Previo reencauzamiento, el 8 de julio de 2020, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León sobreseyó el recurso de apelación RA-003/2020, por considerar que era inexistente la omisión legislativa señalada por Movimiento Ciudadano.

10. Juicio de Revisión Constitucional ante la Sala Regional. En contra de esta determinación, el 14 de julio de 2020, Movimiento Ciudadano promovió Juicio de Revisión Constitucional ante la Sala Regional Monterrey.

11. La Sala Superior asume competencia. Por la importancia y trascendencia del asunto, el 5 de agosto la Sala Superior acordó asumir la competencia para resolver el Juicio de Revisión Constitucional bajo el expediente SUP-JRC-14/2020.

12. La Sala Superior ordena emitir Lineamientos de paridad. El 5 de agosto de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la sentencia del Tribunal Local, al haber acreditado la existencia de la omisión legislativa del Congreso del Estado de Nuevo León en materia de paridad de género y violencia política de género, por lo cual ordenó al Consejo General de la Comisión Estatal Electoral a dictar los Lineamientos de paridad de forma previa al inicio del periodo electoral ordinario local.

13. La Comisión Estatal Electoral emite Lineamientos de paridad. En consecuencia, el 28 de septiembre de 2020, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral aprobó el Acuerdo CEE/CG/34/2020 por el cual se emitieron los Lineamientos de paridad, los cuales establecieron la obligación a los partidos políticos de garantizar la paridad de género en cada bloque de población y sub bloque de competitividad, evitando que las mujeres conformen de manera mayoritaria el sub bloque de más baja competitividad.

14. Inicia el proceso electoral en Nuevo León. El 7 de octubre de 2020 el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral declaró el inicio del proceso electoral local para la renovación de la gubernatura, diputaciones y ayuntamientos en el Estado de Nuevo León.

15. La Comisión Estatal Electoral emite Lineamientos para garantizar la participación de la Comunidad LGTTTIQ+. El 21 de febrero del 2021, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral aprobó el acuerdo CEE/CG/27/2021 por el cual se emitieron los Lineamientos para garantizar la participación política de las personas pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual

16. El PAN impugna los Lineamientos de paridad. El Partido Acción Nacional (PAN) se opuso a dichos Lineamientos de paridad, motivo por el cual promovieron el Recurso de Apelación registrado bajo el expediente RA-006/2020 ante el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León.

17. El Tribunal Estatal Electoral confirma los Lineamientos de paridad. El 23 de octubre de 2020, el Tribunal Estatal Electoral confirmó los Lineamientos de Paridad.

18. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma los Lineamientos de paridad. En fecha 5 de noviembre la Sala Regional Monterrey del Poder Judicial de la Federación confirma la resolución del Tribunal Estatal Electoral en el expediente SM-JDC-340/2020 Y ACUMULADO.

19. Iniciativas presentadas en el Congreso de Nuevo León. Como consecuencia de dicha reforma, se presentaron diversas iniciativas de reformas a la Constitución local, a fin de asegurar la observancia de este principio: a) Expediente Legislativo 14953/LXXVI, b) Expediente Legislativo 14972/LXXVI.

20. Aprobación en primera vuelta. Dichos expedientes fueron dictaminados por la Comisión de Puntos Constitucionales y aprobados en el Pleno del Congreso para su discusión en primera vuelta constitucional, de conformidad con el artículo 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el día 17 de diciembre de 2021.

21. **Aprobación en segunda vuelta.** La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó el dictamen en segunda vuelta el 16 de febrero de 2022 y ese mismo día, se votó y aprobó por el Pleno del Congreso.

22. **Publicación en el Periódico Oficial del Estado.** Finalmente, el día 4 de marzo del año en curso se publicó el "DECRETO NÚM. 097. SE REFORMAN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 36, 41, EL PRIMER PÁRRAFO Y EL DIECISEISAVO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 42, PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 43, PRIMER Y TERCER PÁRRAFO DEL 44, FRACCIONES VI, VII Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48, LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 122, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII EN EL ARTÍCULO 48, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, ADEMÁS SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3, FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 6,9,10, LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 35, LAS FRACCIONES XXI Y XXII DEL ARTÍCULO 40, PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I, INCISO A Y B DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 44, 73, SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN VII Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 79, 81 BIS, 81 BIS 1, 81 BIS 2, 81 BIS 3, 81 BIS 4, 81 BIS 5, 81 BIS 6, 81 BIS 7, LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 103, EL PRIMERO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 128, LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 132, EL SEXTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 136, 143, 144, EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 146, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 147, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 162, EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 188, EL PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 204, LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 207, LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 218, LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 239, LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 266, EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 288, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 348, LAS FRACCIONES VIII Y IX DEL 352, LA FRACCIÓN I Y II DEL ARTÍCULO 358, LAS FRACCIONES II Y III DEL ARTÍCULO 370; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 6, UN QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 31, LAS FRACCIONES XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII AL ARTÍCULO 40, SÉPTIMO Y OCTAVO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 136, ARTÍCULO 143 BIS, 143 BIS 1, 144 BIS 1, 144 BIS 2, 144 BIS 3, 146 BIS, 146 BIS 1, 146 BIS 2, ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 230, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 264, 271 BIS, TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 288, SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 333, 333 BIS, FRACCIONES VI Y VII AL ARTÍCULO 348, 348

BIS, FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 352, LA FRACCIÓN I Y II DEL ARTÍCULO 358, EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 369 FRACCIÓN IV Y ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 370, 374 BIS, 377 Y 378; SE DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 132, LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 358, TODOS DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN”.

CONSIDERACIONES PREVIAS AL FONDO:

PRIMERO. LOS PARÁMETROS DE LA ACCIÓN ABSTRACTA DE INCONSTITUCIONALIDAD PERMITEN TOMAR EN CUENTA LA SITUACIÓN JURÍDICA EXISTENTE Y ANTERIOR A LA NORMA IMPUGNADA. Dentro de los instrumentos de control constitucional que existen en el ordenamiento constitucional mexicano, la acción de inconstitucionalidad se distingue por su carácter abstracto, es decir, por tener que analizar la contradicción entre una norma general y la Constitución sin que se tomen en cuenta afectaciones concretas por la entrada en vigor de la norma. Esto queda ilustrado por la jurisprudencia P./J. 10/2012 (10a.):

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CARÁCTER POTESTATIVO DE LAS NORMAS NO ES MOTIVO SUFICIENTE PARA DETERMINAR SU CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD CUANDO SE REFIEREN AL GOCE O EJERCICIO DE DERECHOS HUMANOS. Aun cuando las normas impugnadas en una acción de inconstitucionalidad requieran de la voluntad de las personas para ser aplicadas en casos concretos, deben estudiarse de manera abstracta, esto es, al margen de la posibilidad fáctica de su aplicación concreta, voluntaria o no, en todos aquellos casos en los que se pretenda regular el goce o ejercicio de derechos humanos, pues su carácter potestativo no es motivo suficiente para determinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad cuando se refieren al goce o ejercicio de esos derechos. Acción de inconstitucionalidad 36/2011. Procuradora General de la República. 20 de febrero de 2012. Mayoría de diez votos en relación con el sentido; mayoría de nueve votos a favor de las consideraciones; votó con salvedades: José Ramón Cossío Díaz; votó en contra de las consideraciones: Sergio A. Valls Hernández; votó en contra del sentido: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Alfredo Orellana Moyao. El Tribunal Pleno, el siete de junio en curso, aprobó, con el número 10/2012 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de junio de dos mil doce.

Sin embargo, la naturaleza abstracta del instrumento se extiende hacia el futuro, pero no hacia el pasado; es decir, se debe de tomar en cuenta el contexto jurídico existente al momento de determinar si una norma es inconstitucional, y este comprende situaciones jurídicas que impliquen un nivel de garantía de derechos políticos. Esto lo habremos de expresar en los siguientes razonamientos:

a) EXISTIA UN NIVEL DE GARANTÍA DEL DERECHO A LA IGUALDAD POLÍTICO-ELECTORAL PREVIO A LOS CAMBIOS NORMATIVOS IMPUGNADOS QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA. Con el cumplimiento de la sentencia dimanada del expediente SUP-JRC-14/2020, surgieron en Nuevo León los Lineamientos para Garantizar la Paridad de Género en las Elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamientos en el Proceso Electoral 2020-2021 por virtud del acuerdo CEE/CG/34/2020 del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral.

Dicho acuerdo estableció el principio de transversalidad de la paridad de género, para lo cual creó bloques poblaciones y bloques de competitividad. Dividió los 51 municipios del estado en 3 bloques poblacionales conforme al número de regidurías que les corresponde de acuerdo a lo siguiente:

Bloques Poblaciones			
Número de Bloque	1	2	3
Regidurías por Municipio	8 a 18	6 a 7	4
Cantidad de municipios	9	17	25

Después, dividió los bloques en 3 sub bloques de acuerdo a la competitividad electoral que obtuvieron los partidos políticos conforme a los resultados definitivos del proceso electoral inmediato anterior: porcentajes de votación alta; porcentajes de votación media; y porcentajes de votación baja. Quedando de la siguiente manera:

Bloques Poblaciones			
Número de Bloque	1	2	3

Regidurías por Municipio	8 a 18			6 a 7			4		
	Alto	medio	bajo	Alto	medio	bajo	Alto	Medio	Bajo
Cantidad de municipios	3	3	3	6	6	5	9	8	8

El propósito de dicha medida de paridad transversal consistía en asegurar la igualdad de condiciones en la participación política de hombres y mujeres que aspiran a las Presidencias Municipales, asegurando que las mujeres compitieran en Municipios con poblaciones diversas, pero también bajo criterios de rentabilidad electoral, asegurando su participación en Municipios en los que históricamente son postulados exclusivamente hombres, como lo son los de la Zona Metropolitana de Monterrey.

Por otro lado, se aprobó el acuerdo CEE/CG/027/2021, en donde se establece que los partidos políticos tenían que postular a una fórmula integrada por personas de la comunidad LGBTTTIQ+ entre sus candidaturas a diputaciones locales, y siete fórmulas en sus candidaturas para ayuntamientos (Presidente municipal, regidor o síndico), dividido en tres bloques, 5 fórmulas en el bloque de mayor población y 1 fórmula en los bloques de menor población.

La existencia de normativa supletoria y su aplicación en el proceso electoral de 2021 trajo consigo una situación jurídica, consistente en un nivel de disfrute de derechos políticos electorales por parte de las mujeres, las y los jóvenes y la población LGBTTTIQ+. Esto se constituye en un contexto, al igual que los hechos enunciados en esta demanda, que no puede ser ignorado en el análisis que se realice de la normativa impugnada. En la jurisprudencia P./J. 41/2010, sus Señorías ilustraron la importancia de la realidad jurídica dentro del diseño de la acción de inconstitucionalidad:

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBE REALIZARSE TOMANDO EN CUENTA LA REDACCIÓN VIGENTE DE LOS DEMÁS PRECEPTOS DEL MISMO ORDENAMIENTO AL QUE AQUÉLLAS PERTENECEN, AL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA. Si al resolver una acción de inconstitucionalidad se advierte

que algunas normas que no fueron impugnadas se modificaron o reformaron, debe tomarse en cuenta la redacción vigente de éstas, en atención a la naturaleza abstracta de ese medio de control de la constitucionalidad y a sus características especiales, pues analizar la constitucionalidad de las normas impugnadas con base en una legislación superada llevaría al dictado de sentencias inconsistentes con la realidad, lo que generaría dificultades para su debida cumplimentación, además de que, conforme al artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias dictadas en ese tipo de juicios no tienen efectos retroactivos, salvo en materia penal. Acción de inconstitucionalidad 27/2009 y sus acumuladas 29/2009, 30/2009 y 31/2009. Partidos Políticos del Trabajo, Socialdemócrata, de la Revolución Democrática y Convergencia. 10 de noviembre de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el doce de abril en curso, aprobó, con el número 41/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a doce de abril de dos mil diez.

Es decir, si los cambios a normas no impugnadas deben ser tomados en cuenta al momento de dictar sentencia, de igual forma, debe darse con la garantía de derechos que realizaban normas anteriores a la impugnada.

b) NO RESULTA APLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 90/2011 (9a.) AL ESTAR FRENTE A UNA SITUACIÓN JURÍDICA CREADA, NO POR LEY, SINO POR LA GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS Y, POR TANTO, NO SUJETA A UNA REGRESIÓN. Los lineamientos electorales surgidos del acuerdo CEE/CG/34/2020 establecieron la obligación a los partidos políticos de garantizar la paridad de género por medio de un mecanismo de bloques poblacionales y sub bloques de competitividad, esto a su vez implicó la aplicación directa de los artículos 1º, 4º, 35 fracciones II y III, 41, 115 base I, párrafo primero constitucionales y 1º y 42 constitucionales locales. Esto implicó un estándar de garantía de derechos políticos electorales, pues permitió que mujeres, jóvenes y población LGTTIQ pudieran acceder a candidaturas y a cargos de elección popular.

Aunque esto implica una situación jurídica concreta que se actualizó en las elecciones de 2021, los lineamientos electorales fueron una norma general, abstracta e impersonal, surgida del ejercicio de una acción colectiva, realizada por partido político, en el que se tutelaron los derechos político electorales de una masa indefinida sujetos especialmente protegidos por el artículo 1º constitucional. Es decir, no generaron derechos adquiridos y expectativas de derechos en términos de la jurisprudencia P./J. 87/97, sino un estándar de garantía de derechos humanos, no sujetos a regresividad, según lo establecido por la jurisprudencia 1a./J. 85/2017 (10a.). Esto resulta importante, pues implica que no es aplicable la jurisprudencia P./J. 90/2011 (9a.):

PODERES LEGISLATIVOS DE LOS ESTADOS. TRATÁNDOSE DE SUS LEYES ORGÁNICAS NO PUEDE ALEGARSE, A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PARTIENDO DE QUE QUIENES INTEGRAN EL CONGRESO LOCAL TIENEN DERECHOS ADQUIRIDOS, O BIEN, DE SITUACIONES JURÍDICAS CREADAS AL AMPARO DE LA LEY ANTERIOR, QUE IMPIDAN UNA REFORMA. Conforme a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el principio de irretroactividad de la ley, contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se transgrede cuando se modifican o destruyen los derechos adquiridos o los supuestos jurídicos nacidos bajo la vigencia de una ley anterior, constriñendo al legislador a no expedir leyes que, en sí mismas, resulten retroactivas, y a las demás autoridades a que no las apliquen retroactivamente. Por otra parte, el objeto de las acciones de inconstitucionalidad es la tutela abstracta de las disposiciones contenidas en la Constitución General de la República, por lo que los sujetos legitimados para promoverlas únicamente pueden denunciar la posible contradicción entre una norma general y la Ley Suprema, no así utilizarlas para defenderse de eventuales agravios causados por la aplicación de una norma general. Por consiguiente, tratándose de leyes de carácter orgánico, no puede alegarse irretroactividad de la ley partiendo de que quienes integran el Congreso Local tienen

derechos adquiridos, o bien, de situaciones jurídicas creadas al amparo de la ley anterior que impidan una reforma pues, de ser así, se llegaría al extremo de que las modificaciones a una Ley Orgánica del Poder Legislativo sólo pudieran realizarse al comienzo del ejercicio de una nueva Legislatura o bien, en su conclusión, obligando sólo a quienes conformen la siguiente, lo que es inadmisibles pues ello impediría no sólo la evolución y actualización de las normas orgánicas, elementos necesarios para incentivar el perfeccionamiento democrático, sino también la propia representatividad democrática. Cuestión distinta sería que la modificación de la organización interna del Poder Legislativo pudiera afectar principios democráticos que rigen la función legislativa, pero ello en todo caso debe verificarse a partir de ese estándar y no del principio de irretroactividad de la ley. Acción de inconstitucionalidad 68/2008. Diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 18 de agosto de 2011. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. El Tribunal Pleno, el veintisiete de octubre en curso, aprobó, con el número 90/2011 (9a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de octubre de dos mil once.

Adicionalmente a que los lineamientos de paridad establecen un estándar de garantía de derechos, quienes ejercemos la presente acción de inconstitucionalidad no la utilizamos para proteger derechos adquiridos, sino para garantizar, como entidades de interés público, la inclusión democrática en el país, tal y como nos lo mandata el artículo 41 constitucional.

c) LOS LINEAMIENTOS DE PARIDAD SON NORMA GENERAL PARA EFECTO DE LA GARANTIA DE DERECHOS POLÍTICOS Y DE CONTEXTO SOBRE LA PROGRESIVIDAD QUE DEBE TENER LA NORMATIVA ELECTORAL DE NUEVO LEON. La Sala Superior del Tribunal Electoral, en el expediente SUP-JRC-14/2020, resolvió una omisión legislativa en materia de paridad y violencia política de género, en la víspera de la prohibición constitucional de legislar en materia electoral. Para evitar el que las elecciones se llevaran dentro de un vacío normativo, se estableció que el organismo electoral local debía de emitir reglas y principios:

A la fecha en que se dicta la presente ejecutoria, en términos de lo razonado, es de advertirse que el Congreso del Estado de Nuevo León no ha legislado en materia de paridad y, lo ha hecho parcialmente, respecto de la violencia política en razón de género, derivado de las reformas constitucional y legal publicadas en el DOF el seis de junio de dos mil diecinueve y el trece de abril del año en curso, respectivamente.

Con relación a lo anterior, cabe resaltar que la normativa convencional, específicamente, la “Convención de Belém Do Pará”, refiere que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, por lo que su eliminación es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida, por lo que, en ese sentido, hace un reconocimiento al derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Este mandato convencional, en México, obliga a todas las autoridades, órganos autónomos e incluso, los particulares, lo que necesariamente conlleva a que la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, como integrante del Estado Mexicano y en ejercicio de su competencia, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, lo cual comprende sin lugar a dudas, su derecho a participar en las elecciones democráticas, acceder al ejercicio del poder público y a desempeñar cualquier cargo de elección popular, en un entorno libre de violencia política de género.

Por tal razón, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no puede dejar de lado que, dentro de los actos relacionados la organización, el desarrollo y la realización de elecciones para la renovación de los cargos de elección popular -y que son los mayormente caracterizan a una democracia-, la atención de la protección general de las mujeres forma parte de su misión tendente al fortalecimiento del ejercicio pleno de los derechos

político-electoral, como respuesta a las exigencias de una sociedad democrática cambiante.

Aunado a lo antes expuesto, no puede pasarse por alto que el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.", lo cual, permite sostener que, en casos en que se persiga la tutela de los derechos humanos, debe privilegiarse la implementación, de manera general, de medidas y acciones preventivas que tiendan a dar respuesta y a la implementación de mecanismos que garanticen su pleno y efectivo ejercicio, por encima de formalismos que, en ciertas ocasiones, llevan a su retardo.

Lo anterior se justifica, si se tiene en cuenta que la democracia (como régimen que permite la participación ciudadana mediante el ejercicio de derechos político electorales), y la justicia electoral (como actividad que juzga sobre la vulneración de derechos y provee lo necesario para su reparación, así como para garantizar su ejercicio y respeto) son conceptos que no podrían cubrir sus objetivos, si su materialización se pretendiera realizar al margen o de manera paralela a la comisión de actos de violencia política contra las mujeres.

Ahora bien, es importante destacar que, por virtud del mandato constitucional, previsto en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, no es posible que las normas que emita el Congreso del Estado de Nuevo al resultar sustantivas puedan ser aplicadas en el próximo proceso electoral que comienza en octubre del año en curso.

Sin embargo, la trascendencia de los derechos: paridad, derechos de la mujer a una vida libre de violencia política y derechos político-electorales; y, de los principios constitucionales de igualdad, equidad y certeza, ante la imperiosa necesidad de velar por ellos y garantizarlos no puede erigirse

como obstáculo la falta de legislación local en la materia, debido a que a nivel federal se establecieron normas que sirven de parámetros mínimos, previendo reglas y principios, que en determinadas circunstancias, ameritan de una ponderación especial, que atienda a las necesidades y realidad de cada entidad federativa, por lo que como acción afirmativa pueden emitirse Lineamientos o normas de carácter reglamentario, a fin de lograr la materialización de esos derechos.

En tal orden de ideas, a criterio de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y bajo su más estricta responsabilidad podrá aplicar de forma directa o emitiendo lineamientos o reglamentos, las previsiones que contengan reglas o principios generales en materia de paridad y violencia política de género.

Actos que, al igual que todos los demás en materia electoral, estarán sujetos al escrutinio jurisdiccional.

Los lineamientos establecidos por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, por mandato judicial, tuvieron una estructura lógica propia de una norma general, abstracta e impersonal- organizándose en tres capítulos, que a su vez tenía secciones y que comprendían 16 artículos, más un transitorio. Como ejemplo, podemos ver el artículo 6º, que contiene normas deónticas, expresadas de forma imperativa:

CAPITULO II

REGLAS DE POSTULACION PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS

SECCION I

ELECCION DE DIPUTACIONES LOCALES

Regla de paridad en formulas individuales

Artículo 6º. Los partidos políticos, las y los aspirantes a una candidatura independiente y las candidaturas independientes, en el caso de las postulación de cada fórmula de diputaciones locales de mayoría relativa,

deberán estar compuestas por personas propietarias y suplentes del mismo género.

La única excepción a lo previsto en el párrafo anterior es el supuesto en el que, si la fórmula de la candidatura propietaria es de género masculino, su suplente podrá ser de género femenino.

De igual forma, como dijo la Sala Superior en su sentencia, dichos lineamientos no estarían exentos de escrutinio jurisdiccional. Dicha afirmación quedó abierta, pues aunque el PAN y el PT impugnaron su validez frente al Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León y ante la negativa, ante la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bien pudo ejercerse la acción de inconstitucionalidad ante el Pleno de este Honorable Tribunal Constitucional.

Esto, a razón de que los lineamientos son norma general para efectos de dicho instrumento según los términos de la jurisprudencia P./J. 23/99, una ley no necesita ser referida como tal para su impugnación, si su naturaleza jurídica es la de una norma general. Veamos:

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY O DECRETO, NO BASTA CON ATENDER A LA DESIGNACIÓN QUE SE LE HAYA DADO AL MOMENTO DE SU CREACIÓN, SINO A SU CONTENIDO MATERIAL QUE LO DEFINA COMO NORMA DE CARÁCTER GENERAL. Para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad es preciso analizar la naturaleza jurídica del acto impugnado y, para ello, es necesario tener en cuenta que un acto legislativo es aquel mediante el cual se crean normas generales, abstractas e impersonales. La ley refiere un número indeterminado e indeterminable de casos y va dirigida a una pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables. El acto administrativo, en cambio, crea situaciones jurídicas particulares y concretas, y no posee los elementos de generalidad, abstracción e impersonalidad de las que goza la ley. Además, la diferencia sustancial entre una ley y un decreto, en cuanto a su aspecto material, es que mientras la ley regula situaciones generales, abstractas e impersonales, el decreto regula situaciones particulares, concretas e individuales. En conclusión, **mientras que la ley es una disposición de carácter general, abstracta e impersonal, el decreto es un acto particular, concreto e individual.** Por otra parte, la generalidad del acto jurídico implica su permanencia después de su aplicación, de ahí que deba aplicarse cuantas veces se dé el supuesto previsto, sin distinción de

persona. En cambio, la particularidad consiste en que el acto jurídico está dirigido a una situación concreta, y una vez aplicado, se extingue. Dicho contenido material del acto impugnado es el que permite determinar si tiene la naturaleza jurídica de norma de carácter general. Acción de inconstitucionalidad 4/98. Sergio Manuel Aguilera Gómez y otros, en su carácter de diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 28 de mayo de 1998. Mayoría de ocho votos. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Guadalupe M. Ortiz Blanco y Miguel Ángel Ramírez González. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número 23/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

Si bien, las reglas atendieron a la elección de 2021, ante un nuevo vacío legislativo pudieran ser refrendadas por el Consejo Estatal Electoral de Nuevo León, toda vez que su estructura lógica era general, abstracia e impersonal. Esto permite la aplicación de la citada jurisprudencia y también permite que se puedan impugnar decretos disfrazados de norma, como se dio recientemente en la acción de inconstitucionalidad 110/2020 o decretos de interpretación, como fue el caso de la acción de inconstitucionalidad 26/2004 y sus acumuladas 27/2004 y 28/2004.

Si bien, son Lineamientos en el nombre, son normas en su esencia y como dijo Shakespeare "Una rosa con cualquier otro nombre olería tan dulce", por lo tanto, establecen un parámetro de derechos que, por una parte resulta ser un límite constitucional a reformas legislativas futuras y, que por la otra, forma parte del contexto de la presente impugnación y que debe ser tomada en cuenta para el contraste entre la norma general y nuestra Carta Magna.

SEGUNDO. LA LIBRE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA TIENE COMO LÍMITE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Bien se sabe y se ha dicho del cambio de paradigma que resultó ser el cambio de las garantías individuales a los derechos humanos. En la materia electoral se acaba de ver ilustrado con el abandono de las jurisprudencias 34/2013 y 44/2014 por parte de la Sala Superior, para permitir la judiciabilidad de los actos parlamentarios de trascendencia constitucional cuando se trata de la defensa de derechos político-electorales. En la acción de inconstitucionalidad, se ha visto como este Alto Tribunal ha tenido discusiones sobre el

ejercicio de la acción de inconstitucionalidad electoral para la defensa de derechos políticos en la acción de inconstitucionalidad 10/2018 y del ejercicio innovador que fue la suspensión otorgada en la 108/2018.

Este cambio de paradigma se traduce a que una acción de inconstitucionalidad donde se aduce una posible inconstitucionalidad por una regresión, se considere no por la existencia de una norma previa, sino de un acto general que estableció un estándar de protección de derechos. Así se puede entender en la jurisprudencia 1a./J. 87/2017 (10a.), donde se establece que **una regresión a derechos se puede dar sobre de medidas, no de normas:**

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA PROHIBICIÓN QUE TIENEN LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO DE ADOPTAR MEDIDAS REGRESIVAS NO ES ABSOLUTA, PUES EXCEPCIONALMENTE ÉSTAS SON ADMISIBLES SI SE JUSTIFICAN PLENAMENTE. El principio referido impone al Estado, entre otras cuestiones, la prohibición de regresividad, la cual no es absoluta y puede haber circunstancias que justifiquen una regresión en cuanto al alcance y tutela de un determinado derecho fundamental. Sin embargo, dichas circunstancias están sujetas a un escrutinio estricto, pues implican la restricción de un derecho humano. En este sentido, **corresponde a la autoridad que pretende realizar una medida regresiva (legislativa, administrativa o, incluso, judicial) justificar plenamente esa decisión.** En efecto, en virtud de que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a todas las autoridades del Estado Mexicano la obligación de respetar el principio de progresividad, cuando cualquier autoridad, en el ámbito de su competencia, adopta una medida regresiva en perjuicio de un derecho humano y alega para justificar su actuación, por ejemplo, la falta de recursos, en ella recae la carga de probar fehacientemente esa situación, es decir, no sólo la carencia de recursos, sino que realizó todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos a su disposición, en el entendido de que las acciones y omisiones que impliquen regresión en el alcance y la tutela de un derecho humano sólo pueden justificarse si: a) se acredita la falta de recursos; b) se demuestra que se realizaron todos los esfuerzos necesarios para obtenerlos, sin éxito; y, c) se demuestra que se aplicó el máximo de los recursos o que los recursos de que se disponía se aplicaron a tutelar otro derecho humano (y no cualquier objetivo social), y que la importancia relativa de satisfacerlo prioritariamente, era mayor. Esto es, si bien es cierto que las autoridades legislativas y administrativas tienen, en ciertos ámbitos, un holgado margen de actuación para diseñar políticas públicas, determinar su prioridad relativa y asignar recursos, también lo es que dicha libertad se restringe significativamente cuando está en juego la garantía de los diversos derechos humanos reconocidos por nuestro sistema jurídico, ya que éstos, en tanto normas que expresan el reconocimiento de principios de justicia de la máxima importancia moral, tienen prioridad prima facie frente a

cualquier otro objetivo social o colectivo, pues en una sociedad liberal y democrática, estos últimos tienen solamente valor instrumental y no final, como los derechos humanos.

Ante una omisión legislativa provocada por el Congreso de Nuevo León, la Sala Superior del Tribunal Electoral mandató **que se supliera la ausencia de una medida legislativa, con otra**, realizada por la Comisión Estatal Electoral de dicha entidad. Esto se da, en primer lugar, porque la facultad del Congreso de Nuevo León para legislar en materia electoral en lo general, y de la paridad de género en la misma en lo particular dimana de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución:

IV.- De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que:

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición;

Fue la falta de ejercicio de la obligación de garantizar estándares electorales por medio de legislación la que hizo que el Tribunal, por medio de instrumentos electorales, ejerciera su facultad constitucional para tutelar derechos políticos electorales:

Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

(...)

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los

términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables;

El Tribunal mandató que el Consejo Estatal Electoral de Nuevo León ejerciera, para las elecciones de 2021, las facultades constitucionales del 116, fracción IV y, por lo tanto, hizo que se legislara en la materia, quedando cristalizado en un estándar concreto que no puede disminuir. Esto nos permite concluir que el principio de progresividad se da sobre actos de toda índole y que aplica a competencias que pudieran concurrentes, cuando una autoridad es omisa y otra la suplementa.

Si bien, los legisladores locales tienen libertad de legislar en materia electoral, como ha reiterado en numerosas ocasiones esta Suprema Corte en acciones de inconstitucionalidad diversas, esta libertad tiene límites. En la jurisprudencia P./J. 11/2016 (10a.), el Pleno determinó que los mandatos constitucionales y los derechos humanos limitan este aspecto del federalismo mexicano:

LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DE LOS CONGRESOS ESTATALES. ESTÁ LIMITADA POR LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS.

Si bien es cierto que los Congresos Estatales tienen libertad configurativa para regular ciertas materias, como la civil, también lo es que aquélla se encuentra limitada por los mandatos constitucionales y los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México, de conformidad con el artículo 1o. constitucional. En similar sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la legitimidad democrática de ciertos actos o hechos está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos, de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales. Acción de inconstitucionalidad 8/2014. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. 11 de agosto de 2015. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas,

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votó en contra Eduardo Medina Mora I., José Ramón Cossío Díaz estimó innecesaria la votación. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna. El Tribunal Pleno, el veintitrés de junio en curso, aprobó, con el número 11/2016 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 23 de septiembre de 2016 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de septiembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

La sentencia SUP-JRC-14/2020 nos muestra que la legitimidad democrática del Poder Legislativo de Nuevo León no le permite actuar de forma deliberadamente omisa en perjuicio de los derechos humanos; pero tampoco, puede el Congreso local actuar de forma tendenciosa, al legislar de una forma tendenciosa, buscando establecer parámetros de protección de derechos políticos menores a los establecidos en las elecciones de 2021. Es decir, la libertad de configuración legislativa tiene como límite los derechos humanos y el principio de progresividad y, al hacerlo efectivo, este alto tribunal salvaguarda el orden democrático en la entidad.

CONCEPTOS DE INVALIDEZ:

PRIMERO. CONTRAVENCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA AL DARSE VIOLACIONES A LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. El principio de seguridad jurídica es una protección que tienen todas las personas que se encuentran dentro del Estado Mexicano contra los actos que pueda realizar su gobierno de forma arbitraria y que pueda lesionar la dignidad y todo lo que ella dimana. Este se encuentra consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.
(...)

Esto se desarrolló jurisprudencialmente en la tesis 2a./J. 144/2006, que al efecto establece lo siguiente:

GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenore un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y obligaciones que le corresponden a la autoridad. Amparo directo en revisión 538/2002. Confecciones y Artesanías Típicas de Tlaxcala, S.A. de C.V. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Amparo directo en revisión 503/2002. Agencia Llantera, S.A. de C.V. 8 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Cepeda Anaya.

Amparo directo en revisión 1769/2002. Raúl Jaime Ayala Alejo. 7 de marzo de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas. Amparo directo en revisión 405/2004. Empaques Modernos San Pablo, S.A. de C.V. 19 de mayo de 2004. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre. Amparo en revisión 164/2004. Inmobiliaria TMM, S.A. de C.V. y otras. 18 de febrero de 2005. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García. Tesis de jurisprudencia 144/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en sesión privada del veintinueve de septiembre de dos mil seis.

Esta H. Suprema Corte de Justicia del Nación ha determinado de manera clara y expresa que, el procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad. Consideramos que no se respetaron los cauces institucionales de dos maneras diferentes:

En primer lugar, en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales de fecha 17 de diciembre de 2021, al momento de discutir el Dictamen en admisión a Discusión, en términos del artículo 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, se presentaron diversas reservas por parte de los grupos Legislativos, que integran dicha Comisión; aunado que se aprobaron las Reservas presentadas por el Presidente de la Comisión en mención, vulnerando así el procedimiento que marca la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, ya únicamente debe ser admitida a su discusión y, por ende, continuar con el proceso legislativo al respecto para su reforma. Esto queda constatado en el acta de Comisión de fecha 17 de diciembre de 2021, de la forma siguiente:¹

¹ [puntos-const-08.pdf \(hcnl.gob.mx\)](#)

Posteriormente, el Diputado Presidente pide al Diputado Secretario Félix Rocha Esquivel someter a votación las reservas presentadas por el Diputado Héctor García García, siendo aprobada por mayoría de los presentes, bajo la siguiente votación.

PRESIDENTE	Dip. Héctor García García	A favor
VICEPRESIDENTE	Dip. Eduardo Geona Domínguez	A favor
SECRETARIO	Dip. Félix Rocha Esquivel	A favor
VOCAL	Dip. Eduardo Leal Buenfil	A favor
VOCAL	Dip. Adriana Paola Coronado Ramírez	A favor
VOCAL	Dip. Gilberto de Jesús Gómez Reyes	A favor
VOCAL	Dip. Alhina Berenice Vargas García	A favor
VOCAL	Dip. Julio César Cantú González	A favor
VOCAL	Dip. Ivonne Liliana Álvarez García	A favor
VOCAL	Dip. María del Consuelo Gálvez Contreras	A favor
VOCAL	Dip. Jessica Elodia Martínez Martínez	Abstención

Esto, resulta una violación los artículos 148, 149 y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el cual a continuación se cita:

Art. 148.- En cualquier tiempo puede ser reformada esta Constitución, más las reformas que se propongan, para ser admitidas a discusión, **necesitarán el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso.**

Art. 149.- Tornadas en consideración las adiciones o reformas se **publicarán y circularán profusamente con extracto de la discusión**, pudiendo ser votadas en ese mismo periodo de sesiones, siguiendo el procedimiento para su discusión y aprobación que establece la ley de la materia.

Art. 150.- Para que las **adiciones o reformas propuestas sean aprobadas, y se tengan como parte de esta Constitución, necesitarán el voto de las dos terceras partes, cuando menos, de los Diputados que integran la Legislatura.**

Adicionalmente, el 17 de diciembre del 2021, al terminar la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales, se reanudó la sesión plenaria y se sometió el asunto a discusión y votación, aún y cuando el dictamen no fue circularizado dentro de las 24 horas, tal como lo señala el Reglamento antes citado en su artículo 49:

ARTICULO 49.- Para que el dictamen de cualquiera de las Comisiones pueda ser sometido a la Asamblea deberá presentarse suscrito por la mayoría de los Diputados que integren la comisión correspondiente y ser

entregado con una anticipación de veinticuatro horas a los Diputados, salvo los casos en que el asunto haya sido recibido con el carácter de urgente, por acuerdo del Pleno, a solicitud del orador o de algún otro Diputado, o por un Acuerdo Legislativo. Si algún Diputado disintiera del criterio sustentado, podrá formular su voto particular, que dará a conocer por su lectura íntegra en la misma sesión, inmediatamente después de que sea leído el dictamen de que se trate.

La entrega de dictámenes se hará en archivo electrónico a través del sistema interno de transmisión y comunicación de información del Congreso denominado intranet, debiendo quedar constancia de su recepción, a cuyo efecto, la Oficialía mayor recabará los recibos que confirmen que el archivo electrónico de que se trate ha quedado a disposición de los interesados.

Esto resulta ser una violación al artículo 126 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.

Por lo que el proceso legislativo dispone, se debe admitir a discusión antes de su debido análisis, y adecuación conforme al proceso legislativo, para que posteriormente se someta de manera definitiva, posterior a la publicación de los extractos de la discusión, publicadas en el Periódico Oficial del Estado, donde se requiere, para quedar firme la reforma, las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura. En la etapa del procedimiento a discusión, esto queda constatado en la estenográfica de fecha 17 de diciembre de 2021, de la forma siguiente:²

Transcurrido el receso señalado, y continuando en el punto del orden del día de informe de comisiones, se le concedió el uso de la palabra a la C. Dip. Alhinna Berenice Vargas García, quien solicitó la dispensa del trámite establecida en el artículo 49 del reglamento para el gobierno interior del congreso, para dar lectura íntegra al dictamen con proyecto de decreto expediente número 14953/LXXVI y 14972/LXXVI de la comisión de puntos constitucionales ya que **no cumple** con lo establecido en dicho numeral.

² <https://www.youtube.com/watch?v=n2gkmPOQr1c> (minuto 3:44:00)

La c. Presidenta sometió a consideración del pleno la dispensa de trámite, la cual fue aprobada por unanimidad de los presentes.

Procedió la c. Dip. Alhinna Berenice Vargas García a dar lectura al dictamen auxiliada en la misma por los diputados Jessica Elodia Martínez Martínez, Eduardo Leal Buenfil y Adriana Paola Coronado Ramírez.

³ La C. Presidenta en funciones diputada Norma Edith Benítez rivera, expresó: "en virtud de que el presente dictamen contiene iniciativa de reforma a diversos artículos a la constitución política del estado libre y soberano de nuevo león, y a la ley electoral para el estado de nuevo león y para los efectos de lo establecido en el artículo 148 de la constitución política local, requiere para ser sometido a discusión, el voto de la mayoría de los miembros presentes de la cámara, se pone a la consideración del pleno para que pueda ser sometida a discusión, por lo que solicito a la oficialía mayor abra el sistema electrónico de votaciones".

Hecha la votación correspondiente, la C. Secretaria informó que se registraron a través de tablero electrónico: 24 votos a favor, 11 votos en contra y 0 votos en abstención; y a través de la plataforma digital: 4 votos a favor, 1 voto en contra y 0 votos en abstención. Siendo aprobado por mayoría de 28 votos a favor, 2 votos en contra y 0 votos en abstención.

Aprobado que fue la C. Presidenta expresó: "aprobado que fue para ser sometida a discusión, tal como lo establece el artículo 148 de la constitución política local, me permito solicitar a la secretaría se sirva elaborar una lista de oradores para qué, con fundamento en el artículo 149 de la constitución política local, las intervenciones de los diputados sean publicadas y circuladas profusamente con extracto en su intervención en el periódico oficial del estado".

³ <https://www.youtube.com/watch?v=n2gkmPOQr1c> (minuto: 5:10:11)

Ya habiéndose publicado los extractos de las Discusiones en el Periódico Oficial del Estado el día 24 de diciembre del año de 2021, donde ningún diputado intervino a favor del sentido del Dictamen sometido a discusión.

Por otro lado, en sesión ordinaria de Pleno en fecha de 16 de febrero de 2022, posterior a la Lectura íntegra del Dictamen de los expedientes, 14953/LXXVI y 14972/LXXVI, es de exponer que al momento de discutir el dictamen y listar oradores a favor y en contra, negó a Movimiento Ciudadano un tercer orador, bajo el argumento de que no se levantó la mano cuando se solicitó listar una primera ronda.

Esto queda constatado en la estenográfica de fecha 16 de febrero de 2022 de la forma siguiente:⁴

“Al haber intervenido ya tres oradores a favor y en virtud de que solicitan el uso de la palabra más oradores, la C. Presidenta sometió a consideración de la asamblea el abrir una nueva ronda, solicitando a los CC. Diputados que si están a favor de la propuesta lo manifiesten de la manera acostumbrada.

En ese momento solicitó y se le concedió el uso de la palabra al c. Dip. Waldo fernández gonzález, quien desde su lugar expresó: “probando rondas o puedo estar equivocado?”.

C. Presidenta: “no, lo que pasa es que el primer turno en contra nadie lo utilizó”.

C. Dip. Waldo Fernández González: “lo que pasa es que como es dictamen, se entiende que la primera persona que sube a posicionar es a favor del dictamen”.

C. Presidenta: “no, en la discusión siempre se inicia en contra, lo dije en contra y nadie quiso hacer uso de la palabra, después subió el diputado

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=8qx-0VlHSvQ> (minuto 6:18:54)

Héctor García a favor, no como presidente de la comisión, si no como un diputado a hablar a favor de ese turno”.

C. Dip. Waldo Fernández González: “gracias presidenta”.

En ese momento solicitó y se le concedió el uso de la palabra a la **c. Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre**, quien expresó: “pudiera solo leer el fundamento de que se perdió el turno porque son tres oradores en contra y tres a favor, y solo van dos en contra y hay una persona que también quiere participar”.

C. Presidenta: “si, nada más quisiera recordarle diputada, si mencioné primero, si alguien deseaba hacer uso de la palabra en contra y nadie levantó la mano”.

C. Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre: “bueno, por eso acabo de pedir si me pueden leer el artículo”.

C. Presidenta: “con mucho gusto revisamos el artículo y se lo hago de su conocimiento. Solicito a la secretaria dé lectura al artículo donde viene establecido este procedimiento, si es tan amable”.

C. Secretaria: “claro que si presidenta.

“Artículo 126. Terminada la lectura del dictamen que presente la comisión o habiéndose otorgado la dispensa que prevé el artículo 112 bis, el presidente lo someterá al pleno del congreso para su discusión, para lo cual ordenará al primer secretario elabore una lista de diputados en contra del dictamen y una lista de los que deseen participar a favor de este. Solamente podrán hablar en la misma sesión, tres diputados en contra y tres a favor del sentido de la proposición que se discuta, con la excepción de que el pleno del congreso considere que un asunto requiere más participaciones en la tribuna. Las intervenciones de los oradores tendrán un tiempo límite de hasta cinco minutos cada una”.

C. Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre, quien expresó: "gracias, el artículo que acaban de leer, si bien protocolariamente se entiende que primero se pide en contra, el artículo dice que no debe de haber más de tres oradores a favor y en contra, falta un orador en contra, entonces, al menos del que leyeron, quizás hay otro artículo, pero creo que un derecho no quita el otro y aquí creo que todos estamos a favor de la participación y tres intervenciones me parece justo"

C. Presidenta: "pero pregunto nada más, ¿ustedes están conscientes de que nosotros preguntamos el turno en contra al principio de la discusión? Muy bien, ese turno se perdió, porque nadie de ustedes estaba atento para poder solicitar esa participación diputada".

C. Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre: "¿me permite seguir la moción? Aparte señala que se hará una lista de oradores y no se armó la lista completa de oradores, hay una persona que también quiere participar y falta un turno en contra, y de ese artículo no se advierte que, porque mencionó y nadie levantó la mano, así pasa, a veces puede empezar a favor y luego en contra.

C. Presidenta: "la lista tradicionalmente se hace primero en contra y luego a favor, después en contra y luego a favor, y luego en contra, y luego a favor, por eso así lo hemos hecho, creo que aquí en la asamblea podemos decir que no ha habido una excepción donde hayamos hecho lo que usted está comentando, así se ha llevado el procedimiento en el congreso, pero tengo la posibilidad de abrir una nueva ronda de oradores y por eso atendiendo a la petición que hay de que continúe el debate, esta mesa directiva siempre ha sido abierta a continuar el debate, cuando hay más participaciones ha habido hasta dos, tres, o cuatro rondas para poder participar sobre algún tema y por eso quiero someter a la consideración de la asamblea si tienen a bien una nueva ronda de oradores, para poder que se haga uso de la palabra sobre este tema".

Para una moción solicitó y se le concedió el uso de la palabra a la **c. Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz**, quien expresó: "quiero apoyar la moción que hace mi compañera Irais Reyes, a final de cuentas son tres turnos de oradores por cada una de las presentaciones, entonces este turno de oradores todavía está abierto, independientemente de que en un principio no se haya tomado la palabra, aún está abierto el turno y es posible que haya una tercera participación dentro de este bloque, así es que así es como se debe de interpretar este artículo y así es como puede estar sucediendo en este momento, entonces yo le solicito que le conceda el uso de la palabra a quien lo ha solicitado en este momento".

C. Presidenta: "haber, la interpretación de esta mesa directiva en ese artículo es como yo se los estoy comentando en este momento, por el procedimiento que se ha venido haciendo en el congreso durante todo el tiempo que llevamos aquí, no hemos hecho ninguna excepción. Permítame, ya la escuché diputada, si me permite nada más concluir mi observación ¿verdad? Si con mucho gusto nada más permítame concluir y si gusta le vuelvo a dar el uso de la palabra. Los turnos han sido alternativos durante todo este tiempo, es más le quiero decir que hasta yo voltee con la compañera y le dije ¿nadie va participar en contra? El turno estaba para que pudieran participar, no lo utilizaron, se utilizaron los dos turnos en contra siguientes y los tres turnos a favor, esta mesa directiva no está en contra de que puedan seguir debatiendo, permítame poner a la asamblea que se abra una nueva ronda de oradores, para poder que pueda hablar no uno, si no más diputados que deseen hacer uso de la palabra, si el pleno así lo determina diputada. Con mucho gusto".

C. Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz: "independientemente del uso y costumbre que se ha venido utilizando en estas sesiones, que es muy cambiante también, a final de cuentas el reglamento es muy claro, entonces son tres oradores a favor y tres en contra ¿sí? Independientemente de que tenga el turno de a favor o en contra, como usted lo está señalando, permítame ahora a mí, por favor, yo la escuché también, muy bien, y en este sentido, lo que yo le quiero decir es que sabemos también lo que va suceder,

con esta mayoría simplemente se va cancelar una siguiente ronda, entonces es por eso que le insisto, que permita que se agoten estas tres participaciones dentro de este bloque de participación a favor y en contra”.

C. Presidenta: “le voy a pedir a la secretaria, que pueda dar lectura a otro párrafo del artículo, por favor si es tan amable”.

C. Secretaria:

“artículo 24. Además de las atribuciones establecidas e la ley orgánica del poder legislativo, al presidente del congreso le corresponde: fracción v. Dirigir y encausar los debates, concediendo el uso de la palabra a los diputados alternadamente en contra y a favor, en el orden que lo soliciten, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 91 fracción iv, 99 bis, 126, 127 párrafo segundo y tercero, y 129 de este reglamento, debiendo indicar al orador cuando haya concluido el tiempo reglamentario a efecto de que concluya con su intervención. Es cuanto presidenta”.

Enseguida solicitó y se le concedió el uso de la palabra al c. **Dip. Carlos Alberto de la Fuente Flores**, quien expresó: “sobre el tema que traen las compañeras, creo que ya se dio la explicación correcta, quisiera que avanzáramos presidenta, por favor”.

Enseguida la C. Presidenta sometió a consideración de la asamblea el abrir una nueva ronda, solicitando a los CC. Diputados que si están a favor de la propuesta lo manifiesten de la manera acostumbrada.

Hecha la votación correspondiente, fue desechada la propuesta por mayoría de 11 votos a favor, 27 votos en contra y 0 votos en abstención para abrir una nueva ronda de oradores.

Esto resulta ser una violación al artículo 126 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, el cual a continuación se cita:

CAPÍTULO III DE LAS DELIBERACIONES

Artículo 126.- Terminada la lectura del dictamen que presente la Comisión, o habiéndose otorgado la dispensa que prevé el artículo 112 Bis, el Presidente lo someterá al Pleno del Congreso para su discusión, para lo cual ordenará al Primer Secretario elabore una lista de Diputados en contra del dictamen y una lista de los que deseen participar a favor de éste.

Solamente podrán hablar en la misma sesión tres Diputados en contra y tres a favor del sentido de la proposición que se discuta, con la excepción de que el Pleno del Congreso considere que un asunto requiera más participaciones en la Tribuna. Las intervenciones de los oradores tendrán un tiempo límite de hasta cinco minutos, cada una.

En el caso de que no se inscriban oradores en contra, bastará con una intervención a favor, del diputado que se haya inscrito en primer lugar en la lista correspondiente. De no haber diputados inscritos a favor o en contra, se procederá en los términos del artículo 116 del presente Reglamento.

En caso de Voto Particular, se seguirá el procedimiento establecido en los párrafos primero y segundo de este Artículo y el diverso 129 del presente ordenamiento legal, con excepción de que el uso de la Tribuna será de hasta por tres minutos por cada participación. El Primer Secretario tomará cuenta del tiempo y lo hará saber al Presidente, a efecto de que éste en uso de su facultad de dirigir los debates, discusiones y deliberaciones, aperciba al orador para que termine su intervención.

Para las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como a las leyes consideradas como constitucionales en los términos del Artículo 152 del citado ordenamiento legal, se seguirá el procedimiento establecido en el presente Artículo, así como en el numeral 129 del presente Reglamento.

Esto evitó la participación de Movimiento Ciudadano como minoría parlamentaria dentro de la discusión del dictamen e incidió de forma negativa en la deliberación democrática que, por principio, todo legislativo en el Estado Mexicano debe tener.

Adicionalmente, el 16 de febrero del año en curso, al terminar la sesión de la Comisión de **Puntos Constitucionales**, en la que se discutió la reforma materia de la presente acción de inconstitucionalidad, se reanudó la sesión plenaria que estaba en receso y de inmediato se sometió el asunto a discusión y votación, **aun y cuando el dictamen no fue circulado dentro de las 24 horas**, tal como lo señala el Reglamento antes citado en su artículo 49:

ARTICULO 49.- Para que el dictamen de cualquiera de las Comisiones pueda ser sometido a la Asamblea deberá presentarse suscrito por la mayoría de los Diputados que integren la comisión correspondiente y ser entregado con una anticipación de veinticuatro horas a los Diputados, salvo

los casos en que el asunto haya sido recibido con el carácter de urgente, por acuerdo del Pleno, a solicitud del orador o de algún otro Diputado, o por un Acuerdo Legislativo. Si algún Diputado disintiera del criterio sustentado, podrá formular su voto particular, que dará a conocer por su lectura íntegra en la misma sesión, inmediatamente después de que sea leído el dictamen de que se trate.

La entrega de dictámenes se hará en archivo electrónico a través del sistema interno de transmisión y comunicación de información del Congreso denominado intranet, debiendo quedar constancia de su recepción, a cuyo efecto, la Oficialía mayor recabará los recibos que confirmen que el archivo electrónico de que se trate ha quedado a disposición de los interesados.

Se dijo en sesión que el asunto era de carácter urgente y por lo tanto, no era necesario circular el dictamen; sin embargo, esta afirmación no se explicó y por lo tanto, no hubo motivación. Veamos:⁵

En el punto del orden del día correspondiente a informe de comisiones, se le concedió el uso de la palabra a la C. Dip. Alhinna Berenice Vargas García, quien solicitó la dispensa del trámite establecida en el artículo 49 del reglamento para el gobierno interior del congreso, para dar lectura íntegra al dictamen con proyecto de decreto expediente número 14953/LXXVI y 14972/ LXXVI de la Comisión de Puntos Constitucionales, ya que NO CUMPLE con lo establecido en dicho numeral.

El c. Presidente en funciones sometió a consideración del pleno la dispensa de trámite, solicitando a los CC. Diputados manifestar su voto de manera económica. Asimismo, solicitó el voto de los diputados que se encuentran vía remota en la plataforma digital. La cual fue aprobada por unanimidad de los presentes.

⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=8qx-0VjH8yQ> (minuto 1:53:52)

Acto seguido procedió la Dip. Alhinna Berenice Vargas García, auxiliada por los Dip. Julio César Cantú González, Dip. Gilberto de Jesús Gómez Reyes y Dip. Héctor García García, a dar lectura íntegra al dictamen.

Esta ausencia de motivación en la determinación de un asunto como urgente en su proceso de votación, fue suficiente para que este Alto Tribunal declarara la invalidez de la reforma al artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León en la controversia constitucional 63/2016, cuyo punto total citamos:

79. Finalmente, por lo que respecta a las normas reguladoras del procedimiento legislativo, debe destacarse un requisito, a saber, la entrega del respectivo dictamen con un plazo de anticipación mínimo de veinticuatro horas previos su discusión en la asamblea.

81. Por su parte, el artículo 49 del mencionado Reglamento establece que “[p]ara que el dictamen de cualquiera de las Comisiones pueda ser sometido a la Asamblea deberá presentarse suscrito por la mayoría de los Diputados que integren la comisión correspondiente y ser entregado con una anticipación de veinticuatro horas a los Diputados, salvo los casos en que el asunto haya sido recibido con el carácter de urgente, por acuerdo del Pleno, a solicitud del orador o de algún otro Diputado, o por un Acuerdo Legislativo”.

89. De la valoración de las constancias de autos, este Pleno estima que el procedimiento legislativo recién descrito contiene una variedad de irregularidades, siendo relevante una para sustentar la inconstitucionalidad de la integridad del procedimiento legislativo, a saber, la falta de entrega del dictamen correspondiente a los Diputados y Diputadas integrantes de la Asamblea con la anticipación de al menos veinticuatro horas.

91. Ahora bien, aunque los términos de la petición de dispensa se refirió a la lectura del dictamen, debe concluirse que su función jurídica fue la de convalidar la falta de cumplimiento del plazo previsto en el artículo 49 del multicitado Reglamento, lo que se refuerza, pues en autos no consta que los integrantes de la Asamblea hubieran dispuesto de una copia del dictamen

con el referido plazo previo, ni menos aún consta una autorización para que esta distribución se realizara vía electrónica, en términos del artículo 51 del referido Reglamento legislativo.

91. Así, este Pleno concluye que, si bien se dispensó por unanimidad que el dictamen de segunda vuelta no haya sido entregado con una anticipación de veinticuatro horas, lo cierto es que este Alto Tribunal se ha pronunciado en el sentido de que la dispensa no puede ser convalidada por la mayoría del Pleno del Congreso, salvo en los casos de carácter urgente que se encuentren plenamente motivados.

93. Es criterio de este Pleno que los órganos de dirección del Congreso tienen una inhabilitación jurídica para no interferir en los procesos de conocimiento y reflexión de los representantes populares sobre aquello que será objeto de deliberación parlamentaria. No obstante, como se había adelantado, el proceso legislativo rara vez es único y esta Suprema Corte ha reconocido la amplia deferencia de los órganos legislativos para determinar su agenda legislativa, lo que incluye la posibilidad de determinar que algunos temas deban resolverse con urgencia. La mayoría de las legislaciones en la materia establecen una facultad de dirección de este tipo y en nuestros precedentes hemos reconocido su utilidad y validez, siempre y cuando su ejercicio se realice en condiciones de regularidad.

94. En este punto se retoma la doctrina de este Pleno en torno a la justiciabilidad de la decisión de los órganos directos de los parlamentos de dispensar los trámites legislativos. Como lo hemos dicho en diversas ocasiones, el legislador tiene la opción –comúnmente reconocida en la mayoría de las legislaciones– de dispensar el trámite de esos requisitos, si califica el asunto de urgente resolución. Si lo hace, las reglas procesales se dispensan y se puede formar una decisión sin cumplirse con los requisitos que garantizan una voz a las minorías, así como las condiciones de reflexión para las mayorías.

95. Así, la decisión legislativa de dispensar del trámite legislativo determina la aplicabilidad o inaplicabilidad de los principios de la democracia deliberativa y esta Corte debe ser muy cuidadosa en determinar las condiciones de su justiciabilidad; de ahí, que hayamos determinado que su

cumplimiento debe determinarse en función de las circunstancias concretas de cada caso y sujetarse a un estándar exigente de motivación.

96. Si este requisito sólo fuera formal y bastara invocar cualquier razón para que el órgano legislativo se libre de las exigencias de la deliberación parlamentaria, entonces, aquél podría disponer libremente de las reglas y, con ello, tendría el poder de determinar las condiciones de su sujeción al control constitucional y, peor aún determinar las condiciones en que las minorías parlamentarias puedan hacer valer su voz de una manera informada, responsable y reflexiva.

97. Este Pleno hoy reitera que la determinación de la dispensa de los trámites reglamentarios es justiciable y que su validez se condiciona a la satisfacción de un estándar de motivación apropiado a la importancia de dicha dispensa.

98. En la acción de inconstitucionalidad 52/2006 y sus acumuladas 53/2006 y 54/2006, se estableció el criterio de que el análisis de la motivación de la dispensa legislativa debe ser cualitativo y que exige constatar que el legislador haya ofrecido razones objetivas para su dispensa. En dichos precedentes fuimos muy enfáticos respecto a que un vicio de motivación en la dispensa del trámite legislativo no puede subsanarse a través de su convalidación por la unanimidad o mayoría legislativa.

99. Además, al resolverse la acción de inconstitucionalidad 52/2006 y sus acumuladas 53/2006 y 54/2006, en sesión del cuatro de enero de dos mil siete, este Pleno evaluó la validez de la dispensa del trámite legislativo por parte del Congreso del Estado de Baja California. En la ejecutoria, se hizo notar que el artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Baja California preveía que en los casos de urgencia notoria, calificada por mayoría de votos de los diputados presentes, el Congreso podía dispensar los trámites reglamentarios para la aprobación de las leyes y decretos, por lo cual se concluyó que tal disposición es de naturaleza extraordinaria y que no debe utilizarse de forma que permita a las mayorías parlamentarias aprobar una norma general sin la debida intervención de las minorías, pretextando o apoyándose en esa supuesta urgencia, pues, eventualmente, dicha circunstancia puede provocar la anulación del debate de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Estatal, el cual debe

respetarse en condiciones de libertad e igualdad durante el desarrollo de todo procedimiento legislativo.

100. En este último precedente, se concluyó que deben existir, cuando menos, las siguientes condiciones para considerar que, en un determinado caso, se actualiza dicha urgencia: 1) La existencia de determinados hechos que generen una condición de urgencia en la discusión y aprobación de una iniciativa de ley o decreto; 2) La relación medio-fin, esto es, que tales hechos necesariamente generen la urgencia en la aprobación de la iniciativa de ley o decreto de que se trate, pues, de no hacerse de esta forma, ello traería consecuencias negativas para la sociedad; y, 3) que la condición de urgencia evidencie la necesidad de que se omitan ciertos trámites parlamentarios, sin que esto se traduzca en afectación a principios o valores democráticos.

101. Este criterio ha sido reiterado en diversos precedentes por parte de este Pleno. Al resolverse la acción de inconstitucionalidad 107/2008 y sus acumuladas 108/2008 y 109/2008, se determinó que el legislador debía motivar la decisión de dispensa de cualquier trámite legislativo que tuviera un impacto en las condiciones de deliberación parlamentaria. De este asunto derivó la tesis **"DISPENSA DE TRÁMITES LEGISLATIVOS EN EL ESTADO DE COLIMA. PARA SU PROCEDENCIA DEBEN MOTIVARSE LAS RAZONES QUE LLEVAN A CALIFICAR UN ASUNTO COMO URGENTE"**.

102. Este Pleno hace notar que el presente caso presenta una semejanza sustancial con otros precedentes, en los cuales se ha determinado declarar la invalidez del procedimiento legislativo.

Todo esto como conjunto crea un vicio en el origen de la norma que se haya expedido, toda vez que el acto legislativo es una unidad indisoluble y al existir una falla en una de las partes que lo constituyen, se contamina la totalidad del acto. Así lo entendieron sus Señorías con la jurisprudencia P./J. 35/2004:

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ACTOS QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL. Los actos que integran el procedimiento legislativo

constituyen una unidad indisoluble con la norma general emanada de ese procedimiento, de tal forma que no procede impugnar cada acto legislativo individualmente, ya que no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través del análisis conjunto de esos actos con motivo de la publicación de la norma; por otra parte, de conformidad con los artículos 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la propia Constitución Federal, el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional combatidos sean publicados en el medio oficial correspondiente, de lo cual se concluye que la impugnación de los actos que integran el procedimiento legislativo únicamente puede realizarse a partir de que es publicada la norma general, porque es en ese momento cuando los actos adquieren definitividad. Acción de inconstitucionalidad 23/2003.—Diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Sonora.—3 de febrero de 2004.—Unanimidad de ocho votos.—Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios.—Ponente: Juan N. Silva Meza.—Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticuatro de mayo en curso, aprobó, con el número 35/2004, la tesis jurisprudencial que antecede.—México, Distrito Federal, a veinticuatro de mayo de dos mil cuatro. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, junio de 2004, página 864, Pleno, tesis P./J. 35/2004; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, febrero de 2004, página 419.

Todo vicio en el proceso legislativo transgrede también el principio de legalidad consagrado en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, pues si se contraviene la Ley, no puede considerarse a la norma correctamente fundamentada; por otro lado, se violenta el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 14 del mismo Ordenamiento Supremo, pues si la Ley que se emitió con un vicio formal de origen puede justificar actos

de privación, no se siguen las formalidades esenciales del procedimiento -las cuales deben interpretarse armónicamente con el antes citado artículo 72 para incluir lo legislativo- y al no hacerlo, se impide al gobernado tener certeza de que no está sujeto a decisiones arbitrarias por parte de las autoridades. Todo esto, deviene en violaciones a las formalidades esenciales del procedimiento legislativo, que este Tribunal Constitucional estableció en la tesis plenaria P. L/2008:

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS CUYO CUMPLIMIENTO SE DEBE VERIFICAR EN CADA CASO CONCRETO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA INVALIDACIÓN DE AQUÉL. Para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo aducidas en una acción de inconstitucionalidad infringen las garantías de debido proceso y legalidad contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y provocan la invalidez de la norma emitida, o si por el contrario no tienen relevancia invalidatoria de esta última, por no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión, es necesario evaluar el cumplimiento de los siguientes estándares: 1) El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad, es decir, resulta necesario que se respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras y a las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates; 2) El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas; y, 3) Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas. El cumplimiento de los criterios anteriores siempre debe evaluarse a la vista del procedimiento legislativo en su integridad, pues se busca determinar si la existencia de ciertas irregularidades procedimentales impacta o no en la calidad democrática de la decisión final. Así, estos criterios no pueden proyectarse por su propia naturaleza sobre cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el desarrollo del procedimiento legislativo, pues su función es ayudar a

determinar la relevancia última de cada actuación a la luz de los principios que otorgan verdadero sentido a la existencia de una normativa que discipline su desarrollo. Además, los criterios enunciados siempre deben aplicarse sin perder de vista que la regulación del procedimiento legislativo raramente es única e invariable, sino que incluye ajustes y modalidades que responden a la necesidad de atender a las vicisitudes presentadas en el desarrollo de los trabajos parlamentarios, como por ejemplo, la entrada en receso de las Cámaras o la necesidad de tramitar ciertas iniciativas con extrema urgencia, circunstancias que se presentan habitualmente. En este contexto, la evaluación del cumplimiento de los estándares enunciados debe hacerse cargo de las particularidades de cada caso concreto, sin que ello pueda desembocar en su final desatención. Acción de inconstitucionalidad 9/2005. Partido Revolucionario Institucional. 13 de junio de 2005. Mayoría de seis votos. Disidentes: Margarita Beatriz Luma Ramos, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Roberto Lara Chagoyán. El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el número L/2008, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a doce de mayo de dos mil ocho.”

Las formalidades esenciales del procedimiento legislativo son aquellos actos concretos que debe cumplir la autoridad para garantizar que haya una deliberación democrática y las reglas que se produzcan no sean producto de un actuar autoritario. Es por estas razones que consideramos que las reformas que impugnamos son inconstitucionales, al no cumplirse los requisitos de forma que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales.

SEGUNDO. VIOLACIONES AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. El principio de legalidad es uno de los pilares del ordenamiento jurídico mexicano; éste se encuentra contenido en parte en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al efecto establece:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.

(...)

Por otra parte, los parámetros de la fundamentación y la motivación han sido desarrollados jurisprudencialmente en la siguiente tesis de la Segunda Sala durante la Séptima Época:

"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

Séptima Época. Amparo en revisión 8280/67. Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Cinco votos. Amparo en revisión 3713/69. Elías Chahín. 20 de febrero de 1970. Cinco votos. Amparo en revisión 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y coags. 26 de abril de 1971. Cinco votos. Amparo en revisión 2478/75. María del Socorro Castrejón C. y otros. 31 de marzo de 1977. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 5724/76. Ramiro Tarango R. y otros. 28 de abril de 1977. Cinco votos."

Todo acto de autoridad debe tener fundamentación y motivación, y en el caso de las reformas que impugnamos, el documento que las expresa es el dictamen de la Comisión

de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Nuevo León, que examina, en segunda vuelta, los expedientes legislativos 14953/LXXIV y 14972/LXXIV. Este tiene en total 131 hojas, siendo 75 relativas a las consideraciones, pero un volumen amplio no implica un dictamen correcto. Veamos:

Por un lado, se busca justificar la inclusión ciudadana y de expertos en un foro de parlamento abierto efectuado el 19 y 26 de enero de 2022, pero en vez de establecer síntesis de lo expuesto, las conclusiones y lo que de ahí se incorpora al proyecto, se realiza una cita de 53 páginas de una mesa de trabajo y se dice que se integraron estos insumos:

Por esta razón, esta Comisión de Dictamen precisa diversas bondades, mismas que fueron discutidas y analizadas durante este proceso legislativo y algunas otras que fueron retomadas de criterios de autoridades electorales, para reconocer el derecho de diversos grupos vulnerables de la sociedad, mismas que se mencionan a continuación.

Quitando esas 53 páginas de citas, tenemos que la fundamentación y motivación relativa a la paridad de género se limita a cinco páginas y resulta insuficiente a la luz de los requerimientos jurisprudenciales existentes para la dictaminación parlamentaria. Por un lado, no se menciona la sentencia SUP-JRC-14/2020 en lo relativo a la paridad de género, aunque sí se hizo mención de la misma para denotar una omisión legislativa parcial en violencia política de género. Tampoco se citan en particular los Lineamientos de paridad del Consejo Estatal Electoral de Nuevo León para aludir a la estructura de paridad horizontal, vertical y transversal existente, solo se menciona este andamiaje para mencionar la forma en como resulta defectuoso:

Por otra parte, otro de los temas fundamentales que fue parte del proceso electoral 2020-2021 y que privilegió la paridad de género dentro de los ayuntamientos y que pretende incluirse dentro de esta reforma constitucional es establecer el principio de paridad en su máxima expresión donde se aseguren las mismas oportunidades de triunfo para hombres y mujeres, considerando la competitividad electoral de los partidos.

Es necesario señalar que nuestra legislación local fue de las primeras a nivel nacional en contar con la regulación de la paridad de género. Al respecto diversos órganos jurisdiccionales han señalado una falta de un marco normativo efectivo para cumplir con el principio de paridad e incluso autoridades administrativas han ordenado que se emitan las disposiciones necesarias para garantizar el principio de paridad transversal en la elección de los ayuntamientos, así como para asegurar la integración paritaria de las diputaciones y regidurías en el caso de la representación proporcional.

Para esta soberanía resulta imperante atender la asignatura pendiente de establecer en nuestra legislación un modelo que permita asegurar el cumplimiento de la paridad de género de forma vertical, horizontal y también transversal en las candidaturas a las presidencias municipales, con el verdadero objetivo de que las mujeres tengan posibilidades reales de asumir esos mandos y de participar activamente en la toma de decisiones en nuestras ciudades; así como también establecer los criterios necesarios para que el principio de paridad sea determinante y prioritario en el procedimiento de las asignaciones de la representación proporcional.

Ahora bien, es importante destacar que el pasado proceso electoral, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, aprobó lineamientos mediante los cuales se determinó un modelo para cumplir con lo anterior, sin embargo, a consideración de esta Comisión, lo cierto es que dicho esquema no terminó por ser completamente efectivo, ya que arrojó como resultado que al día de hoy, sólo 10 de las 51 presidencias municipales de Nuevo León están gobernadas por mujeres, por ello es importante identificar los aspectos positivos de dichos lineamientos y crear un modelo que busque hacer más efectiva la participación de las mujeres en dichos cargos, lo cual es el propósito del principio de paridad.

Basta mencionar que en nuestro sistema electoral ya se cuenta con una paridad vertical, horizontal y transversal en el caso de las postulaciones de Diputaciones Locales, la cual funciona y principalmente, es efectiva, ya que desde el proceso electoral del 2015, en el cual fue su primer momento de

aplicación con la entrada en vigor de la reforma política, el promedio de triunfos en elecciones de diputados por mayoría en las últimas 3 elecciones es de 58% hombres y 42% mujeres, habiendo alcanzado ya las mujeres un 46.15% de distritos ganados en la elección del 2018.

AÑO	MUJERES	HOMBRES
2015	10	16
2018	12	14
2021	11	15
PROMEDIO	11	15
%	42%	58%

En cambio, antes de que se aplicara el mencionado modelo, en la elección del 2012, sólo 4 mujeres obtuvieron triunfo de mayoría en la elección de Diputaciones locales, sin garantizar una paridad efectiva y atender así un tema pendiente como es la paridad.

En el caso de la elección de ayuntamientos, la única experiencia que se tiene en Nuevo León es la del pasado proceso electoral, en el cual como ya se mencionó, se obtuvo como resultado que la integración de las presidencias municipales del estado los hombres están representados en un 80% contra sólo un 20% de mujeres.

Es por ello que consideramos que el modelo aplicado en el proceso electoral 2021 no fue lo suficientemente efectivo, y esto se respalda en virtud de que dicho modelo coloca actualmente a Nuevo León en el lugar 27 de 32 en representación de mujeres presidentas municipales con tan sólo un 20%, y además de ello, la mayoría de los 26 estados que se encuentran por encima de Nuevo León, es decir, que cuentan con más porcentaje de alcaldesas, utilizan precisamente el nuevo modelo que pretende esta reforma, el cual es un modelo en los mismos términos que se utiliza para la elección de diputaciones locales.

Debemos señalar que se ha avanzado mucho en este tema y valoramos todos los esfuerzos institucionales de quienes han trabajado por lograr la

paridad de género en la integración de los cargos públicos, pero consideramos que la mejor opción para lograr una mayor participación de las mujeres en las tomas de decisiones ocupando las Presidencias Municipales del Estado, es bajo el modelo ya utilizado para las Diputaciones Locales, el cual sin duda va a incrementar la presencia de las mujeres en esos cargos y se va a poder lograr el propósito de la paridad de género.

Es importante adicionar, que si el modelo que pretende implementarse con esta reforma, hubiese sido aplicado en el proceso electoral anterior, los partidos políticos que más triunfos obtuvieron en la elección de presidencias municipales no habrían cumplido con la regla de paridad transversal, ello en virtud, de que el modelo anterior les permitió postular más hombres en los ayuntamientos donde dichos partidos contaban con mejores porcentajes de competitividad electoral y que precisamente fue lo que generó como consecuencia que los triunfos en las alcaldías los obtuvieran el 80% de los hombres.

Por ello se cuenta con la certeza de que esta reforma viene con un gran avance en materia de paridad de género, que de ninguna manera es regresiva si no al contrario, asegurará mayor representación de las mujeres en los cargos públicos del estado y con ello estamos reconociendo y ampliando la efectividad de los derechos políticos de las mujeres.

Lo anterior al crear un esquema de postulación donde se garantice a la mujer la postulación paritaria al cargo de las presidencias municipales en los municipios donde cada partido recibe sus porcentajes más altos de votación y que en consecuencias es donde existan más oportunidades de triunfo, como es el caso de las diputaciones locales donde actualmente esta legislatura tiene un Poder Legislativo paritario.

Asimismo, se coincide en la reforma que atiende a las personas que se autodescriban como indígenas, estableciendo que los partidos políticos, y coalición deberá postular cuando menos una fórmula de candidaturas a

Diputados al Congreso del Estado de Nuevo León, integrada por personas propietarias y suplentes que se autodescriban como indígenas.

Estableciendo un procedimiento de postulación en el caso de los ayuntamientos en base a un porcentaje de la planilla del Ayuntamiento en cuestión, al menos en un número entero del total de la integración. Asegurando así su participación a través de un procedimiento legal que es parte de esta reforma.

Otro grupo de la sociedad que atiende en esta reforma es el sector de los jóvenes que van de los 21 a los 35 años, toda vez que a través de esta reforma se pretende incorporar a la toma de las decisiones a este grupo social garantizándole su participación efectiva dentro de las elecciones a diputaciones locales y Ayuntamientos de la entidad, atendiendo así acciones afirmativas en favor de ellos siendo un tema pendiente dentro de nuestra legislación local, estableciendo que los partidos políticos y coaliciones postulen cuando menos el 20-veinte por ciento del total de sus candidaturas para elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos a personas que atiendan este sector poblacional para acceder a un cargo de elección popular.

En lo que respecta a la motivación, el dictamen establece que el modelo de paridad existente en Nuevo León es parcialmente efectivo, toda vez que si en la elección de diputados señala que hubo un porcentaje de triunfo de 58% hombres y 42% mujeres, mientras que en lo relativo a los ayuntamientos, se dice, resultaron electos 80% hombres y 20% mujeres, sin aludir las fuentes de dichas cifras. Adicionalmente, existen errores en la justificación, pues no toma en cuenta que las diputaciones tienen un sistema de representación proporcional, como existe en regidurías y que al momento de que se establecieron los bloques que obligaron la postulación de mujeres en lugares competitivos, fueron impugnados en múltiples ocasiones por el PAN, que es el partido que más beneficiado se ve con la normativa impugnada.

Tampoco se explica, que, si bien en 2021, 10 de 51 municipios son dirigidos por mujeres, en 2018 eran 9 y en 2015, 4; se dice que el nuevo esquema es mejor, pero no se establecen las razones concretas de por qué, solo se hacen comparaciones sesgadas. Se habla de la

garantía de la paridad vertical, horizontal y transversal, pero en alcaldías, solamente se garantizarían las primeras dos bajo el nuevo esquema; tampoco se explica que son las paridades vertical, horizontal y transversal y como el nuevo esquema las cumple y el anterior no.

Todo lo anterior deviene en una motivación insuficiente, si tomamos en cuenta que la jurisprudencia P./J. 120/2009 exige una motivación reforzada en la materia legislativa cuando se trata de derechos constitucionalmente relevantes y de categorías sospechosas, en términos del artículo 1º constitucional:

MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. Los tribunales constitucionales están llamados a revisar la motivación de ciertos actos y normas provenientes de los Poderes Legislativos. Dicha motivación puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaria. La reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso. Tratándose de las reformas legislativas, esta exigencia es desplegada cuando se detecta alguna "categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate. En estos supuestos se estima que el legislador debió haber llevado un balance cuidadoso entre los elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y los fines que pretende alcanzar. Además, este tipo de motivación implica el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en el que lo hizo; y, b) La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trate. Por otra parte, la motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna "categoría sospechosa", esto es, cuando el acto o la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas del caso porque no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo. Este tipo de actos, por regla general,

ameritan un análisis poco estricto por parte de la Suprema Corte, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador. En efecto, en determinados campos -como el económico, el de la organización administrativa del Estado y, en general, en donde no existe la posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental- un control muy estricto llevaría al juzgador constitucional a sustituir la función de los legisladores a quienes corresponde analizar si ese tipo de políticas son las mejores o resultan necesarias. La fuerza normativa de los principios democrático y de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan los Congresos Locales, en el marco de sus atribuciones. Así, si dichas autoridades tienen mayor discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que en esos temas las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Por el contrario, en los asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Poder Legislativo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. En esas situaciones, el escrutinio judicial debe entonces ser más estricto, por cuanto el orden constitucional así lo exige. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma. Controversia constitucional 32/2007. Poder Judicial del Estado de Baja California. 20 de enero de 2009. Once votos en relación con los puntos resolutivos de la sentencia respectiva y mayoría de nueve votos en favor del criterio contenido en esta tesis. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Roberto Lara Chagoyán, Israel Flores Rodríguez y Óscar Palomo Carrasco. El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 120/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil nueve.

Al tratarse de una reforma a la ley electoral, en el que se discute el derecho de participación político electoral de las mujeres y las juventudes (curiosamente, el dictamen no menciona a la población LGTTBI), que comprende derechos constitucionalmente relevantes de categorías protegidas por los artículos 1º y 4º de nuestra Carta Magna, debió el dictamen tener una motivación reforzada. ¿Dio cuenta de antecedentes o circunstancias que explicaran que procedía modificar lo establecido por los lineamientos de paridad del CEENL? No. ¿Realizó justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable? Tampoco. Al no realizar esto, se incurre en una violación al artículo 16 constitucional, que, al agregarse a los vicios en el procedimiento legislativo, contaminan el origen de la norma y la misma deviene en inconstitucional.

TERCERO. VIOLACIONES AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD APLICADO A LA PARIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD POLÍTICA. La paridad de género es un principio constitucional que, en parte, surge del artículo 1º constitucional, que establece en su último párrafo el derecho a la igualdad:

Artículo 1º (...)

(...)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Esto significa que las mujeres cis y trans y la comunidad LGTBTTIQ+ no pueden ser sometidas a una discriminación, entendida esta como un trato diferenciado que implique considerarlas como inferiores y que no tenga base en una distinción racional y objetiva. Así lo ha determinado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 9/2016 (10a.):

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL. El principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico. Cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución es, per se, incompatible con ésta. Es contraria toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con algún privilegio, o que, inversamente, por considerarlo inferior, sea tratado con hostilidad o de cualquier forma se le discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. Sin embargo, es importante recordar que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria, siendo jurídicamente diferentes la distinción y la discriminación, ya que la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda constituye una diferencia arbitraria que redunde en detrimento de los derechos humanos. En igual sentido, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, sino su utilización de forma injustificada. No se debe perder de vista, además, que la discriminación tiene como nota característica que el trato diferente afecte el ejercicio de un derecho humano. El escrutinio estricto de las distinciones basadas en las categorías sospechosas garantiza que sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación muy robusta. Acción de inconstitucionalidad 8/2014. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. 11 de agosto de 2015. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votó en

contra Eduardo Medina Mora I., José Ramón Cossío Díaz estimó innecesaria la votación. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.

Además, el párrafo tercero del artículo primero establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con el principio de progresividad de los derechos humanos:

Artículo 1º (...)
(...)

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y **progresividad**. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Por otra parte, en el artículo 35, fracción II se establece el derecho a ser votado:

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:
(...)

II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

(...)

Esto significa que las mujeres cis y trans y la comunidad LGTBTTIQ+ que cumplan con los requisitos que establece la legislación electoral para una candidatura tienen derecho a tener las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía, tanto en los recursos, como en el acceso a la oportunidad en las candidaturas que ofrecen los partidos y en el disfrute de ese derecho. Por último, en cuanto al derecho de participación política de las mujeres, el artículo 41 constitucional se reformó para permitir la paridad de género:

Artículo 41. ...

La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio.

...

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Aunque la Constitución no señala expresamente cuales son los tipos de paridad que operan, su interpretación permite la implementación de principios y esquemas cada vez más generosos y progresivos. Así lo establece la jurisprudencia P/J.1/2020 (10a.):

PARIDAD DE GÉNERO. EXISTE MANDATO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL PARA GARANTIZARLA EN LA INTEGRACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS, TANTO EN SU VERTIENTE VERTICAL COMO EN LA HORIZONTAL.

Hechos: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llegaron a conclusiones diversas al plantearse si existe mandato constitucional para garantizar la paridad de género, en su vertiente horizontal para la conformación de Ayuntamientos. Mientras que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no existía una obligación constitucional de prever la paridad horizontal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que tanto los partidos políticos como las autoridades electorales tienen un deber constitucional y convencional de garantizar la paridad de género horizontal en el registro de sus planillas.

Criterio jurídico: Existe mandato constitucional para garantizar el principio de paridad de género en la conformación de los Ayuntamientos, como deriva del texto expreso de los artículos 1o., párrafos primero y tercero; 4o., primer párrafo; y 41, fracción I, de la Constitución Federal, así como de los diversos II y III, de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer; 2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 4, 5 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Por ende, **en la configuración de cargos de elección**

popular impera una obligación de observar el principio de paridad de género, lo que provoca instrumentar mecanismos para reducir las desigualdades entre las mujeres y los hombres; y, fundamentalmente, para lograr una participación plena y efectiva de aquéllas en todos los ámbitos en los que se desarrolla el servicio público.

Justificación: Una lectura integral y funcional del sistema normativo del Estado Mexicano conduce a razonar que existe mandato para prever la paridad de género horizontal en la integración de los Ayuntamientos, ya que ello constituye una medida para hacer efectiva la igualdad entre la mujer y el hombre. No es obstáculo que la Constitución no aluda a paridad vertical y horizontal, toda vez que es suficiente con el reconocimiento de la paridad de género; aunado a los compromisos derivados de los tratados internacionales de los cuales deriva la obligación del Estado Mexicano de llevar a cabo acciones que la hagan efectiva o por las cuales se logre. Aún más, del análisis de las constancias del procedimiento del que derivó el Decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de dos mil diecinueve, se tiene que el Poder Reformador buscó dar un paso más para el logro de la igualdad sustantiva, ya que es un componente esencial para eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres.

Esta misma jurisprudencia permite entonces la paridad transversal de género; para efectos didácticos, sirve acudir a la explicación hecha por Paula Melgarejo Salgado en el *Heraldo del Estado de México*:⁶

El principio de paridad de género se encuentra normado a nivel constitucional y legal desde el año 2014, por lo que es clara la obligación de los partidos políticos de registrar fórmulas a senadurías y diputaciones, así como planillas de los ayuntamientos, con la postulación de hombres y mujeres en igualdad de porcentajes.

Sin embargo, la aplicación de este principio no tuvo el efecto de que las mujeres accedieran al ejercicio de dichos cargos. Como ejemplo, en las elecciones federal y local de 2015, esta paridad no se vio reflejada en los resultados de la elección. Ello por el mayor apoyo que tienen los hombres frente al electorado, que las candidatas eran postuladas en distritos o municipios en los que su partido era débil y que disponían de recursos limitados para enfrentar la campaña.

Entonces, hubo necesidad de adicionar medidas para que las mujeres no encabezaran solamente distritos o municipios donde los entes políticos eran menos competitivos; situación que se vio reflejada en la Ley General de Partidos Políticos.

⁶ <https://medioteca.ieem.org.mx/es/prensa/espacio-de-colaboraciones-y-opiniones/item/404-la-paridad-transversal>

Por lo que hoy en día estamos en presencia de un tercer nivel en el principio de paridad: la “transversalidad”.

La medida adoptada por el legislador consiste en dividir las candidaturas en tres bloques de competitividad (alta, media y baja) y exige que en cada uno de ellos se postule de manera paritaria a mujeres y hombres. Esto evita sesgos en la postulación de candidaturas y garantiza un número equitativo de mujeres y hombres en los distritos y municipios de cada bloque.

En el proceso electoral federal y local 2017-2018 se le dio operatividad a esta tercera dimensión, lo que facilitó la distribución de géneros en las candidaturas y creó el escenario para que un mayor número de mujeres accedieran a los cargos.

En los Lineamientos de paridad, se implementó la paridad transversal en la forma que se explica, y las excepciones que se establecieron, se hicieron en beneficio de la comunidad LGBTTTIQ+; esto queda expresado en los artículos 12 y 12 bis de los Lineamientos de paridad:

Paridad transversal

Artículo 12. La paridad transversal en la postulación de candidaturas para los ayuntamientos del estado consiste en que se garantice el principio de paridad horizontal con parámetros objetivos que permitan identificar que en ningún caso será admitido que, en la postulación de candidaturas a presidencias municipales, tenga como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos municipios en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos.

Para garantizar la regla establecida en el párrafo anterior, los partidos políticos y coaliciones deberán observar las reglas siguientes:

I. Bloques Poblacionales. Se dividirán los 51 municipios del estado en 3 bloques poblacionales conforme al número de regidurías que les corresponda de acuerdo con la tabla siguiente:

Bloques Poblacionales			
Número de Bloque	1	2	3
Regidurías por Municipio	8 a 18	6 a 7	4
Cantidad de Municipios	9	17	25

El listado de los municipios que comprende cada bloque poblacional se encuentra en el Anexo 2 de los Lineamientos.

II. Sub bloques de competitividad electoral. Se dividirá cada bloque generado con motivo de la fracción I del presente artículo, en 3 sub bloques de la forma siguiente: porcentajes de votación alta; porcentajes de votación media; y porcentajes de votación baja. Esta división se realizará para cada partido político de la forma siguiente:

a. Los porcentajes de votación de cada partido político por municipio se obtendrán conforme a los resultados definitivos de la votación válida emitida obtenida por cada uno de ellos en el proceso electoral inmediato anterior, y se enlistarán dentro de cada bloque poblacional en porcentajes de mayor a menor.

b. En aquellos municipios en los que el partido político no haya postulado candidaturas en la elección inmediata anterior, se enlistarán al final del bloque que corresponda considerando de mayor a menor el número de población conforme al censo poblacional del 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En el caso de las coaliciones, se considerará la votación del partido que presente el mayor número de candidaturas en la elección de ayuntamientos para dicha coalición.

c. Una vez realizado todo lo anterior, se formarán de manera igualitaria los sub bloques de competitividad electoral dentro de cada bloque poblacional y en caso de que el número de ayuntamientos que conformen cada bloque no permita conformar en forma igualitaria cada sub bloque, se deberá asignar la mayor cantidad de municipios en los sub bloques de votación alta o media inclusive.

El listado completo de bloques y sub bloques por partido se encuentra en el Anexo 3 de los Lineamientos.

III. Principios para garantizar la paridad. Los partidos políticos deberán garantizar la Paridad de Género en cada bloque poblacional y sub bloques de competitividad electoral.

a. **Prelación.** Los partidos políticos deberán iniciar la asignación correspondiente en el bloque de mayor población, y así sucesivamente hasta agotar los bloques siguientes.

b. **Competitividad.** Los bloques poblacionales se dividirán en sub bloques de competitividad alta, media y baja.

c. **Transversalidad.** Las postulaciones deberán de garantizar la paridad de género en cada bloque y sub bloque, evitando que las mujeres conformen de manera mayoritaria el sub bloque de más baja competitividad; y en este último caso, procurando la alternancia de género en el resto de los sub bloques con baja competitividad.

d. **Paridad sustantiva.** La totalidad de las postulaciones deberán tener el 50% para cada género, salvo que la suma de la totalidad de las postulaciones resulte impar, en este supuesto la candidatura excedente se deberá asignar al género femenino. Siempre cumpliendo con lo establecido en los incisos anteriores.

(...)

Excepción a reglas de paridad

Artículo 12 bis. Para efectos del cumplimiento de la paridad en la postulación de candidaturas para integrar ayuntamientos, las personas postuladas por partidos políticos o coaliciones que pertenezcan a la comunidad LGTTTIQ+, se estarán a lo siguiente:

En el supuesto de las personas Transgénero o Transexuales, la candidatura corresponderá al género al que se identifiquen y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género, considerando que en la solicitud de registro de la candidatura el partido político o coalición deberá informar que la postulación se realiza dentro de la acción afirmativa de persona de la diversidad sexual con el propósito de constatar el cumplimiento de las reglas de paridad de género.

Por lo que se refiere a las personas Intersexuales deberán señalar el género con el cual se identifican, o bien, como las personas Queer o no binarias, deberán indicar que no se identifican como mujer ni como hombre, términos que se detallarán más adelante.

Para el caso de las coaliciones, las personas LGBTTTIQ+ que sean postuladas por éstas se sumarán a las que postulen en lo individual cada uno de los partidos políticos que las integren, independientemente del partido político de origen de la persona.

En el caso de que las entidades políticas o coaliciones postulen para la presidencia municipal, o bien, una fórmula de una sindicatura o regiduría a personas Queer o no binarias, esto es, que no se identifican como mujer ni como hombre, se considera que en reconocimiento de los derechos humanos, políticos y electorales de la comunidad LGBTTTIQ+, las mismas no serán consideradas en alguno de los géneros; pero, para efectos de paridad, cuando sólo una de las personas que integre la fórmula se identifique como Queer o no binario, el género contabilizará con el que se identifique la diversa persona que integre la fórmula.

Las postulaciones que efectúen las entidades políticas de personas que se identifiquen como Queer o no binarias, no deberán afectar el principio de paridad de género en detrimento de las mujeres, por lo que la mitad de la totalidad de los cargos, deberán ser para las mujeres, salvo que se trate de número fraccionado, en cuyo caso, deberá atenderse a lo dispuesto en el artículo 146, párrafo segundo de la Ley Electoral, en el que se establece que cuando el resultado de la suma de regidurías y sindicaturas sea impar, el género mayoritario será diferente al de la candidatura a la presidencia municipal.

En cambio, las reformas correspondientes a la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León toman la idea de la paridad transversal como se plantea, pero establecen su implementación en dos bloques discrecionalmente armados y sin detalles sobre como limitar su integración, lo que la contraviene, toda vez que permite que se postulen a mujeres en los lugares menos competitivos y va en contra de la igualdad y la transversalidad. De igual forma, se establecen menos beneficios para las candidaturas de la población LGBTTTIQ+ y no median principios de garantía de la paridad. Veamos:

Artículo 144 bis 3. (...)

Los partidos políticos y coaliciones deberán postular por lo menos siete candidaturas de personas que se autoadscriban como integrantes de la comunidad LGTBTTIQ+ de entre la totalidad de candidaturas que postule en planillas para la elección de ayuntamientos del Estado. Estas candidaturas podrán ser aplicables al cargo de la Presidencia Municipal o, en su caso, a la fórmula de candidatos a una regiduría o sindicatura.

En caso de que la postulación de las candidaturas a las que refiere este artículo se realice a través de una coalición, se tendrá por cumplida la obligación para los partidos políticos integrantes de dicha coalición.

Artículo 146. (...)

Los partidos políticos y coaliciones deberán cumplir con la paridad de forma vertical, horizontal y transversal en la postulación de candidaturas a los ayuntamientos del estado en los términos de esta Ley. Los aspirantes a una candidatura independiente deberán cumplir con la paridad vertical en los mismos términos.

Artículo 146 bis 2. La paridad transversal en la postulación de candidaturas para los ayuntamientos del estado consiste en que en ningún caso será admitido que, en la postulación de candidaturas a presidencias municipales, tenga como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos municipios en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos.

Para garantizar la regla establecida en el párrafo anterior, los partidos políticos y coaliciones deberán observar las reglas siguientes:

I. Cada partido político, coalición o candidatura común deberá generar dos bloques, el primero con los veinticinco municipios con porcentajes de votación alta, y el segundo con los veintiséis municipios restantes, y postular en un cincuenta por ciento para cada género las candidaturas a las presidencias municipales en cada bloque; con la salvedad de que en el primer bloque la candidatura excedente será para el género femenino.

II. Para definir los porcentajes de votación que dará la prelación de los municipios para formar los bloques, se usará optativamente por cada partido político o coalición los resultados del último proceso electoral, de los últimos dos o hasta tres procesos en la elección de Ayuntamientos.

En el caso de las coaliciones, se considerará la votación del partido que presente el mayor número de candidaturas a presidencias municipales en la elección de ayuntamientos para dicha coalición.

III. Para los partidos políticos que participan por primera vez en la elección de Ayuntamientos, la Comisión Estatal Electoral definirá la modalidad en la que deberá postular sus candidaturas para garantizar que no haya más del cincuenta por ciento de candidatos de un mismo género.

Las coaliciones deberán observar las mismas reglas de paridad de género que los partidos políticos, aun cuando se trate de coaliciones parciales o flexibles, en cuyo caso, las candidaturas que registren individualmente como partido no serán acumulables a las de la coalición y consecuentemente, las que registren como coalición, no serán acumulables a las que registren individualmente como partido político para cumplir con el principio de paridad.

La reforma aprobada, modifica la definición del principio de transversalidad de la paridad establecida en el acuerdo de la Comisión Estatal Electoral. Lo anterior, al excluir la formación de bloques poblacionales. Esto tiene como efecto, excluir a las mujeres de las presidencias municipales con más relevancia poblacional, en las que históricamente se han postulado hombres. En el caso de la comunidad LGTTTTIQ+, la reforma aprobada no establece los grupos poblacionales que se crearon en el acuerdo de la Comisión Estatal Electoral, por lo que da como resultado la exclusión de la comunidad LGBT en la participación política de los Ayuntamientos más poblados, siendo relegados a candidaturas en municipios poco poblados.

Para mayor claridad, antes de la reforma electoral así se aplicó el principio de transversalidad de la paridad:

Bloques Poblaciones									
Número de Bloque	1			2			3		
Regidurías por Municipio	8 a 18			6 a 7			4		
	Alto	medio	bajo	Alto	medio	bajo	Alto	Medio	Bajo
Cantidad de municipios	3	3	3	6	6	5	9	8	8

Con la reforma electoral, se aplicaría de la siguiente manera:

Bloques poblacionales	
Municipios con votación alta	Municipios con votación baja
25 municipios	26 municipios

En efecto, el anterior criterio de paridad transversal establecido en los Lineamientos de la CEENL obligó a que los partidos políticos tuvieran que postular a tres mujeres en municipios con población alta, maximizando la aplicación del principio de paridad de género. Además, se logró la postulación de mujeres en municipios de tres tipos de poblaciones y con alta rentabilidad electoral, asegurando el pleno ejercicio del derecho de acceso a un cargo público en condiciones de igualdad, pues garantizó que las mujeres participaran para ocupar Presidencias Municipales en municipios de todas proporciones poblacionales y con altas posibilidades de ganar una elección.

Todo esto se tradujo en una serie de acciones afirmativas que lograron que un mayor número de mujeres participase en municipios urbanos (que son los que cuentan con mayor número de integrantes) en las elecciones de 2021; anteriormente, las mujeres habían sido sistemáticamente discriminadas en los mismos. Al incluir la variable poblacional, se hace posible que un mayor número de mujeres lleguen a estos municipios, lo cual maximiza los efectos del principio de constitucional de paridad y se cumplen con dos finalidades de este principio: promover y acelerar la participación política de las mujeres en cargos de elección popular y eliminar cualquier forma de discriminación y exclusión histórica o estructural. Esto resuena con lo establecido con la jurisprudencia electoral 11/2018:

Uziel Isaí Dávila Pérez

vs.

Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal,
con sede en Monterrey, Nuevo León

Jurisprudencia 11/2018

PARIDAD DE GÉNERO. LA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS DEBE PROCURAR EL MAYOR BENEFICIO PARA LAS MUJERES.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1º, párrafo quinto, 4º y 41, Base I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4, inciso j), 6, inciso a), 7, inciso c), y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 1, 2, 4, numeral 1, y 7, incisos a) y b) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, se advierte que la paridad y las acciones afirmativas de género tienen entre sus principales finalidades: 1) garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, 2) promover y acelerar la

participación política de las mujeres en cargos de elección popular, y 3) eliminar cualquier forma de discriminación y exclusión histórica o estructural. En consecuencia, aunque en la formulación de las disposiciones normativas que incorporan un mandato de postulación paritaria, cuotas de género o cualquier otra medida afirmativa de carácter temporal por razón de género, no se incorporen explícitamente criterios interpretativos específicos, al ser medidas preferenciales a favor de las mujeres, deben interpretarse y aplicarse procurando su mayor beneficio. Lo anterior exige adoptar una perspectiva de la paridad de género como mandato de optimización flexible que admite una participación mayor de mujeres que aquella que la entiende estrictamente en términos cuantitativos, como cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de mujeres. Una interpretación de tales disposiciones en términos estrictos o neutrales podría restringir el principio del efecto útil en la interpretación de dichas normas y a la finalidad de las acciones afirmativas, pues las mujeres se podrían ver limitadas para ser postuladas o acceder a un número de cargos que excedan la paridad en términos cuantitativos, cuando existen condiciones y argumentos que justifican un mayor beneficio para las mujeres en un caso concreto. Sexta Época: Recurso de reconsideración. SUP-REC-1279/2017.—Recurrentes: Uziel Isaí Dávila Pérez.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León.—18 de octubre de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón.—Secretarios: Mauricio I. Del Toro Huerta y Augusto Arturo Colín Aguado. Recurso de reconsideración. SUP-REC-7/2018.—Recurrentes: Eva Avilés Álvarez y otras.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco.—31 de enero de 2018.—Unanimidad de votos.—Ponente: Indalfer Infante Gonzales.—Secretarios: Anabel Gordillo Argüello y Rodrigo Escobar Garduño. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-4/2018 y acumulado.—Actores: Partido de Renovación Sudcaliforniana y otro.—Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur.—14 de febrero de 2018.—Unanimidad de votos. Ponente: Felipe de la Mata Pizafía.—Secretarios: Laura Márquez Martínez, Mercedes de María Jiménez Martínez, María del Carmen Ramírez Díaz, Carlos Gustavo Cruz Miranda y Fernando Ramírez Barrios. La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 26 y 27.

Adicionalmente, consideramos que el acto reclamado propicia interpretaciones estrictas o neutrales que pudieran restringir su efecto útil y subvertir la finalidad de las acciones afirmativas, pues las mujeres se podrían ver limitadas para ser postuladas o acceder a un número de cargos que excedan la paridad en términos cuantitativos, cuando existen

condiciones y argumentos que justifican un mayor beneficio para las mujeres en un caso concreto.

La reforma que impugnamos por parte del Congreso del Estado de Nuevo León resulta violatoria al principio de progresividad, contenido en el párrafo tercero del artículo primero Constitucional y en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Respecto a este, la Primera Sala de la SCJN ha determinado en la jurisprudencia 1a./J. 85/2017 (10a.) que “(El principio de progresividad) en sentido negativo, impone una prohibición de regresividad: el legislador tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos”.

En el caso concreto, el legislativo local emite un acto legislativo contrario a derechos humanos que ya fueron reconocidos por la autoridad administrativa electoral local y por los organismos judiciales electorales competentes, lo cual a su vez es violatorio del tercer párrafo del artículo primero Constitucional que establece el principio de progresividad de los derechos humanos. Lo anterior al eliminar los bloques poblacionales que permitían a las mujeres y a la comunidad LGTBTTIQ+ participar en condiciones de igualdad en las elecciones electorales en municipios más poblados, relegando a dichos grupos a municipios con menos relevancia poblacional.

Esto implica una violación al principio de progresividad de los derechos humanos contenido en el párrafo tercero de la Constitución en relación con el derecho a la paridad y a la igualdad (establecidos en el artículo 1 y 41 de la Constitución) y el derecho a acceder a un cargo público en condiciones de igualdad, establecido en el artículo 23, inciso c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aunado a que este también establece el derecho a la participación en la cosa pública y en el derecho a ser votado. A saber:

ARTÍCULO 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
 - a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

- b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
- c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

En la jurisprudencia 2a./J. 35/2019 (10a.), quedó establecido que la progresividad debe incluir el progreso, es decir, que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar, como lo es el derecho a ser votada en condiciones de paridad contenido en el artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, en la definición de reglas de paridad transversal de la aludida reforma electoral, se da una regresión injustificada en el derecho a acceder a un cargo público en condiciones de igualdad. A saber:

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO. El principio de progresividad que rige en materia de los derechos humanos implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, generalmente, la efectividad de los derechos humanos no se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el principio de progresividad de los derechos humanos se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio aludido exige a todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y también les impide, en virtud de su expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico del Estado mexicano. Amparo directo en revisión 2425/2015. Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones, S.A. de C.V. 12 de agosto de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez

Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. Amparo en revisión 1148/2016. Lorenzo Torres Vargas. 21 de junio de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I; votó en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa. Amparo en revisión 249/2018. Defensoría Capacitación Asesoría Patrimonial y Consultoría, S.C. o Defensoría Capacitación Asesoría Patrimonial y Consultoría, S.A. de C.V. 4 de julio de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I; se separó de algunas consideraciones José Fernando Franco González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Estela Jasso Figueroa.

Amparo directo en revisión 4191/2018. Miguel Ángel Huerta Rodríguez. 14 de noviembre de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Selene Villafuerte Alemán.

Amparo en revisión 886/2018. Soluciones Empresariales HPG, S.A. de C.V. 9 de enero de 2019. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora I, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Javier Laynez Potisek; se apartó de consideraciones relacionadas con el estudio de progresividad Margarita Beatriz Luna Ramos y con reserva de criterio José Fernando Franco González Salas. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Roberto Fraga Jiménez.

Tesis de jurisprudencia 35/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de febrero de dos mil diecinueve.

Por lo tanto, bajo la premisa de cumplir con el mandato de legislar en materia de paridad, y diciendo que se implementa un mecanismo de paridad transversal, se crea un mecanismo discrecional que permite a los partidos postular a mujeres en distritos no competitivos, contraviniendo su esencia. Esto implica una regresión injustificada por vía de una medida legislativa a un estándar de garantía del derecho a participar en la cosa pública por sí o por representantes electos y el derecho a acceder a un cargo público en condiciones de igualdad, todos establecidos en tratados internacionales y en la

Constitución. Por otra parte, la regresión a los derechos de la comunidad LGTBTTIQ+ también esta injustificada, al violar sus derechos a la participación política en condiciones de igualdad.

CUARTO. INCONSTITUCIONALIDAD POR FRAUDE A LA LEY EN SEDE CONSTITUCIONAL. La reforma a la Ley Electoral de Nuevo León que aducimos inconstitucional se realiza bajo la premisa de que se cumple con el mandato constitucional de legislar, establecido en los transitorios de la reforma constitucional en materia de paridad de género. No obstante, en los hechos, hemos constatado que no cumple con ninguna de estas características, pues se establece un régimen electoral que contraviene la paridad transversal ya existente desde las elecciones de 2021. Esto constituye un fraude a la ley en sede constitucional, a razón de que usa el cumplimiento de un mandato constitucional para subvertir su espíritu.

El fraude a la ley dimana del derecho privado, con su origen en el derecho romano en los dichos de Paulo en el Digesto; una definición inicial la podemos encontrar en la siguiente tesis aislada del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito:

FRAUDE A LA LEY E INTERPRETACIÓN LÓGICA. SU CONCEPTO. La figura del fraude a la ley, *fraus legis* o *in fraudem legis agere*, como se le conoció en el derecho romano, consiste en respetar la letra violando el espíritu de la ley. Sobre el particular, es atendible el texto de Paulo, visible en el párrafo 29, Título III, Libro I, del Digesto: *Contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet; in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit*. Esto es: Obra contra la ley el que hace lo que la ley prohíbe; y en fraude, el que salvadas las palabras de la ley elude su sentido. Dicho en otros términos: fraude a la ley es frustrar sus propósitos, es violar o eludir el espíritu que la anima y llevar a un resultado contrario al deseado, con el pretexto de respetar su letra; en cuya situación se está finalmente en contra de la ley, al ser esa aplicación literal contraria a la intención del legislador. En relación con lo anterior, debe tenerse en cuenta que mientras que la interpretación literal de la ley es la que determina el sentido propio de las palabras, la interpretación lógica es la que fija el verdadero sentido o fin que persigue la ley. OCTAVO TRIBUNAL

COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 245/2017. Bancolombia Puerto Rico Internacional, Inc. 31 de octubre de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. Secretaria: Patricia Villa Rodríguez.

María Elena Mansilla y Mejía complementa esta definición y dice que el fraude a la ley consiste “en la conducta totalmente voluntaria realizada con el exclusivo fin de obtener un fin ilícito a través de un medio lícito”.⁷ Existiendo un mandato constitucional de legislar, se cumple con el mismo de una forma que contraviene el contenido de la reforma constitucional que le dio origen; es decir, se usa la letra de la ley para violar su espíritu. Para profundizar, el acto reclamado es un fraude a la ley que sigue la estructura lógica del abuso del derecho; es decir, el fraude a la ley es el género y el abuso del derecho, la especie. Este concepto surge del derecho civil francés, que hizo la doctrina del abuso del derecho postulada por Josserand en 1905 y que puede definirse de la forma siguiente:⁸

1º Habrá abuso de un derecho cuando el titular disimule bajo el ejercicio de un derecho un acto ilícito, que no figura en el contenido del derecho[...]^{2º} En ciertos casos en que la responsabilidad no está fundada en la culpa, puede resultar del acto realizado en el ejercicio de un derecho por que está ligada aún a una *actividad lícita*. Se necesita por lo tanto determinar las modalidades del ejercicio del derecho para saber en que momento empieza la responsabilidad. El acto llamado abusivo es aquí simplemente el *acto anormal*, es decir aquel que excede las condiciones habituales del ejercicio del derecho. Por ejemplo, un industrial que explota con una autorización administrativa una industria en condiciones tales que causa perjuicio a las propiedades vecinas, es declarado responsable de ese perjuicio y se dice que abusó su derecho.

En el caso del acto reclamado, el abuso de derecho se traduce en un abuso competencial que comprende los siguientes elementos:

⁷ Mansilla y Mejía, María Elena, *Fraude a la ley: fraus legis facta*, Revista Cultura Jurídica, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México

<https://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/revista-cultura/pdf/CJA-11-7.pdf>

⁸ Ripert, Georges, Boulanger, Jean, *Tratado de derecho civil según el tratado de Planiol*, t. I, La Ley, Buenos Aires, 1963.

- **Competencia otorgada:** La potestad del transitorio cuarto del Decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad entre Géneros, de fecha 6 de junio de 2019.
- **La autoridad que la ejerce:** El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y el C. Gobernador del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
- **La otorgante de la competencia:** La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- **Acto realizado:** La reforma a diversas normas, entre ellas, la Ley Electoral
- **Normativa violada por el acto:** La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- **Daño:** Se crea un estándar de paridad electoral de genero menor al existente en 2021, que permite a partidos políticos el cumplir su cuota de postulación de mujeres al enviarlas a contender en lugares no competitivos.

Para explicar el punto del daño, consideramos pertinente explicar de nueva cuenta la restricción de derechos que establece la nueva reforma electoral, en lo que se refiere a la materia de paridad, de manera visual. Antes de la reforma electoral así se aplicó el principio de transversalidad de la paridad:

Bloques Poblaciones									
Número de Bloque	1			2			3		
Regidurías por Municipio	8 a 18			6 a 7			4		
	Alto	medio	bajo	Alto	medio	bajo	Alto	Medio	Bajo
Cantidad de municipios	3	3	3	6	6	3	9	8	8

Con la reforma electoral, se aplicaría de la siguiente manera:

Bloques poblacionales

Municipios con votación alta	Municipios con votación baja
25 municipios	26 municipios

La reforma es contraria al espíritu de la ley de las reformas constitucionales de paridad, sobretudo en relación a los principios de derechos humanos, como es el principio de progresividad, las cuáles buscan una mayor participación política de las mujeres. El anterior criterio de paridad transversal establecido en los Lineamientos de la CEENL obligó a que los partidos políticos tuvieran que postular al menos cuatro mujeres en municipios con población alta, maximizando la aplicación del principio de paridad de género. Además, se logró la postulación de mujeres en municipios de tres tipos de poblaciones y con alta rentabilidad electoral, asegurando el pleno ejercicio del derecho de acceso a un cargo público en condiciones de igualdad.

El fraude a la ley en sede constitucional redunda en una violación del principio de seguridad jurídica, toda vez que se lleva a cabo un acto arbitrario bajo la premisa de que se actúa de una forma que va con los estándares de conducta que dan certidumbre y estabilidad a la ciudadanía.

DERECHO

Son aplicables al caso las disposiciones 1, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para proveer de convicción a esa Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo establecido por los artículos 31, 32 y 59, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañamos el material probatorio que consideramos, resulta idóneo para acreditar las manifestaciones vertidas.

Pruebas que relacionamos con todas y cada una de las consideraciones planteadas en este curso:

PRUEBAS

1. **DOCUMENTAL PÚBLICA.** Consistente en la certificación expedida por la Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, **LICENCIADA DANIELA CASAR GARCÍA**, de fecha veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en la que se hace constar que Movimiento Ciudadano cuenta con registro nacional de partido político, por lo que se encuentra en pleno goce de los derechos y sujeto a las obligaciones que la Ley Suprema y las Leyes reglamentarias en Materia Electoral le señalan, misma que relacionamos con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente Acción de Inconstitucionalidad, solicitando que nos sea bien recibida.

2. **DOCUMENTAL PÚBLICA.** Consistente en las certificaciones expedidas por la Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, **LICENCIADA DANIELA CASAR GARCÍA**, de fechas catorce de febrero de dos mil veintidós y quince de marzo de dos mil veintidós, en las que se hace constar que los suscritos nos encontramos registrados como Coordinador, integrantes y Secretario General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, misma que relacionamos con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente Acción de Inconstitucionalidad, solicitando que nos sea bien recibida.

3. **DOCUMENTAL PÚBLICA.** Consistente en la certificación expedida por la Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, **LICENCIADA DANIELA CASAR GARCÍA**, de fecha veintitrés de octubre de dos mil veinte, que acredita la vigencia de los Documentos Básicos de Movimiento Ciudadano; normativa en la que se hace constar que los suscritos contamos con las facultades de representación de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, misma que relacionamos con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente Acción de Inconstitucionalidad, solicitando que nos sea bien recibida.

4. **DOCUMENTAL PÚBLICA.** Consistente en el Acuerdo CEE/CG/34/2020 de la Comisión Estatal Electoral por el cual se emitieron los Lineamientos de paridad. Este

también puede encontrarse en la siguiente liga:

<https://www.ceenl.mx/sesiones/2020/acuerdos/Acuerdo%20CEE-CG-34-2020.pdf>

5. **DOCUMENTAL PÚBLICA.** Consistente en el Acuerdo CEE/CG/27/2021 de fecha 21 de febrero de 2021 emitido la Comisión Estatal Electoral, por el cual se emitieron los Lineamientos para garantizar la participación política de las personas pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual. Este también puede encontrarse en la siguiente liga:

<https://www.ceenl.mx/sesiones/2021/acuerdos/Acuerdo%20CEE-CG-027-2021%20con%20anexos.pdf>

6. **DOCUMENTAL PÚBLICA.** Consistente en los diarios de debates de primera y segunda vuelta de la reforma impugnada.

7. **DOCUMENTAL PÚBLICA.** Consistente en la convocatoria y lista de asistencia de las comisiones dictaminadoras en primera y segunda vuelta.

8. **DOCUMENTAL PÚBLICA.** Consistente en la copia certificada del Periodico Oficial del Estado de Nuevo León de fecha 04 de marzo de 2022 que contiene la Reforma impugnada de las fojas 590 a la 625 de la Octava Prueba.

9. **INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.** En todo lo que favorezca a los intereses de Movimiento Ciudadano y que se relacionan con todos y cada uno de los hechos y puntos de derecho de la presente Acción de Inconstitucionalidad.

Por lo expuesto y fundado al ustedes CC. ministros de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy atentamente solicitamos se sirvan:

PRIMERO. - Tener por presentada en el tiempo y la forma exigidos por la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Acción de Inconstitucionalidad, promovida por Movimiento Ciudadano.

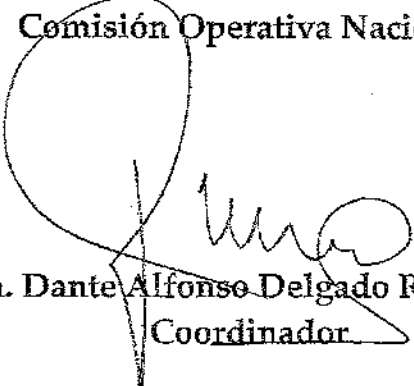
SEGUNDO.- Tener por reconocida la personalidad y el carácter de quienes la suscribimos y por señalado el domicilio para recibir notificaciones y documentos, así como autorizados a los delegados que se mencionan.

TERCERO.- Cumplido el procedimiento establecido en la Ley Reglamentaria en cita, dictar Resolución, declarando la invalidez de la legislación impugnada, por resultar violatoria de los derechos, principios y valores consagrados y protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ciudad de México a 01 de abril del 2022

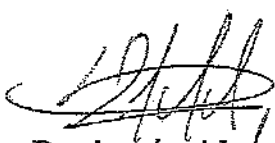
Protestamos a Ustedes lo necesario.

Por México en Movimiento
Comisión Operativa Nacional




Sen. Dante Alfonso Delgado Rannauro
Coordinador

Integrantes



Lic. Benjamín Alamillo González




Lic. Ana Lucía Baduy Valles



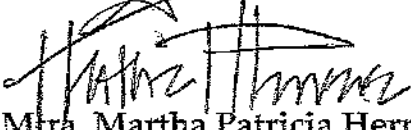
Lic. Rubén Isaac Barrios Ochoa



Lic. Jacobo David Cheja Alfaro



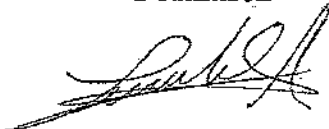
Dip. Priscilla Franco Barba



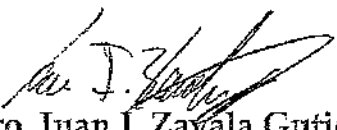
**Mtra. Martha Patricia Herrera
González**



Dip. Tabita Ortiz Hernández



Mtra. L. Alejandra Puente García



Mtro. Juan I. Zavala Gutiérrez
Secretario General de Acuerdos

005824

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2007 ABR 1 PM 2 57

OFICINA DE
CERTIFICACION JUDICIAL
Y CORRESPONDENCIA

Recibido mediante buzón Judicial en (71) fojas con-

- (2) certificaciones de registro en (1) foja cada una.
- (1) anexo en copia certificada relativa a los documentos básicos vigentes del Partido Político Nacional denominado "Movimiento Ciudadano" en (213) folios según su certificación.
- diversos anexos en copias simples sin folio.
- (2) legajos en copias certificadas en un total de 1109 fojas según su certificación.
- (7) legajos en copias certificadas en (625), (68), (3), (37), (35), (28), (8) fojas, según sus certificaciones.
- (1) anexo con sello fechador y firma autografiada en (4) foja.
- (3) discos compactos en un sobre certificado.

Eli